

LA AMENAZA SIN ROSTRO:  
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y TERRORISMO  
The Faceless Menace: International Humanitarian Law and Terrorism

EDUARDO TISNÉS ZAPATA

TRABAJO DE GRADO

Asesor

José Alberto Toro Valencia, Ph.D, LL.M

ESCUELA DE DERECHO

UNIVERSIDAD EAFIT

MEDELLÍN

2020

Nota de aceptación

---

---

Presidente del Jurado

---

Jurado

---

Jurado

---

Medellín, de del 2020

## **Resumen**

Desde mediados del siglo XX, los Estados han comenzado a abandonar las confrontaciones entre ellos; este fenómeno ha tenido varias explicaciones desde diferentes perspectivas, como las teorías militares y legales. Además, los tratados internacionales han prohibido el uso injustificado de la fuerza de un estado contra otro, haciendo ilegal el inicio de un conflicto armado internacional. Esta prohibición fue reforzada por la Carta de las Naciones Unidas y sus requisitos para la guerra. Sin embargo, el conflicto armado no ha llegado a su fin, se ha transformado en una confrontación entre fuerzas estatales legítimas y grupos insurgentes. Estas insurgencias han utilizado medios de guerra no convencionales para imponer su voluntad. Estos nuevos medios incluyen, entre otros, actos terroristas, los cuales están prohibidos en el curso del conflicto. Como el terrorismo representa una de las mayores amenazas para la seguridad internacional, es importante tener una definición única y completa de este; sin embargo, esto ha sido imposible debido a la compleja realidad política internacional. Ahora, las organizaciones terroristas han violado el derecho internacional humanitario ya que no respetan las reglas del conflicto convencional. La necesidad de reformar el marco legal de esta guerra moderna se ha convertido en una cuestión de alta relevancia, ya que los agentes estatales están obligados a actuar bajo el Derecho Internacional Humanitario cuando los terroristas no lo están.

**Palabras clave:** Terrorista, Derecho Internacional Humanitario, Conflicto Armado, actores no estatales, acto de terrorismo, crimen de lesa humanidad.

## **Abstract**

Since the mid 20<sup>th</sup> Century, states have begun to abandon confrontations between them. This phenomenon has had several explanations from different perspectives such as military and legal theories. In addition, international treaties have forbidden the unjustified use of force from one state against another, making illegal the start of an international conflict. This prohibition was strengthened by the UN Charter and its requirements for war. However, conflict has not come to an end, it has transformed into a confrontation between legitimate state forces and insurgent groups. These insurgencies have used non-conventional means of war to impose their will. These new means include, among others, terrorist acts, which are prohibited in the course of conflict. As terrorism represents one of the biggest threats to international security, it is important to have a complete unique definition of it, nevertheless, this has been impossible due to the complex international political reality. Now, terrorist organizations have violated International Humanitarian Law as they do not respect rules of conventional conflict. The necessity to reform the legal framework of this modern warfare has become an issue, as state agents are bound to act under International Humanitarian Law when terrorists are not.

**Key words:** Terrorist, International Humanitarian Law, armed conflict, non-state parties, act of terrorism, crime against humanity.

## Índice

INTRODUCCIÓN.....	8
1. NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS MODERNOS.....	14
1.1.LA GUERRA JUSTA Y LA PROHIBICIÓN DE LA GUERRA.....	14
1.2.TERRORISMO Y <i>IUS AD BELLUM</i> EN LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS.....	21
1.3.LOS CONFLICTOS MODERNOS.....	27
2. TERRORISMO Y CRÍMENES INTERNACIONALES .....	40
2.1.CRÍMENES DE AGRESIÓN.....	40
2.2.CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD.....	43
2.3.CRÍMENES DE GUERRA.....	48
3. LA BÚSQUEDA POR DEFINIR EL TERRORISMO.....	52
4. EL TERRORISMO EN EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.....	76
4.1. <i>IUS IN BELLO</i> .....	76
4.2.TERRORISMO Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.....	81
CONCLUSIONES.....	102
REFERENCIAS.....	108
REFERENCIAS GENERALES.....	108
INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES.....	119

## **Agradecimientos**

Antes de comenzar quisiera agradecer a mi asesor de tesis, el Dr. José Alberto Toro Valencia, quien me tuvo paciencia por varios meses y cuyas conversaciones y aportes fueron indispensables para mí personalmente y para el desarrollo de este escrito. A su vez al Dr. Alfonso Cadavid Quintero y a su agudeza, a la Universidad EAFIT, a su rector Juan Luis Mejía Arango, y a la Escuela de Derecho.

Asimismo, quisiera agradecer a mis padres, quienes han sido clave en lo que soy y a quienes admiro inmensamente; a mi abuela, quien me enseñó a siempre ver el lado positivo de las cosas; a mi hermana, con quien crecí y de quien siento un gran orgullo; y a Catalina, quien no me termina de sorprender y enseñar cosas nuevas cada día.

*A los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y de Policía que arriesgan sus vidas para  
proteger a Colombia*

## Introducción

*“El Terrorismo es el arma preferida de los hombres debiles y malvados”*

Ronald Reagan<sup>1</sup>

A lo largo de la historia, el conflicto armado ha sufrido una serie de cambios que han determinado la forma en la que las poblaciones y los seres humanos se enfrentan entre sí. En cuanto a la guerra, esta evoluciona con los años, adquiriendo nuevas características y siendo objeto de nuevas regulaciones. Durante el Siglo XIX, la guerra interestatal fue objeto de una serie de tratados y regulaciones que reglamentaron su uso. Estas regulaciones consistían, de manera predominante, en el establecimiento de algunas condiciones para que una acción armada entre Estados fuese legal (Fuentes, 2014). Así, desde hace aproximadamente 50 años, los Estados han comenzado a abandonar los conflictos entre sí, es decir las guerras interestatales. A su vez, la historia militar revela que los cambios de la guerra han resultado en una pérdida del monopolio del Estado en la guerra, es decir, actualmente los Estados se encuentran enfrentando insurgencias, las cuales se han convertido en los principales actores armados (Lind, 2004).

Esta nueva realidad de la guerra no solo afecta a Colombia en el marco del Conflicto Armado, sino a diversos países al rededor del mundo. En muchos de los conflictos actuales, los grupos insurgentes se han convertido en los protagonistas, creando así una red de conflictos internos. La naturaleza de estos conflictos ha variado a lo largo de la historia; sin embargo,

---

<sup>1</sup> Geraghty, J. (2006). Voting to Kill: How 9/11 Launched the Era of Republican Leadership. Nueva York: Touchstone.



actualmente el mundo es escenario de una creciente ola de terrorismo, empleado predominantemente por los grupos insurgentes mencionados. De esta forma, estas insurgencias normalmente recurren a actos de terrorismo como método de obtener una ventaja militar; los actos de terrorismo provenientes de grupos armados ilegales se han incrementado de manera considerable desde el 2000, siendo la manera más eficiente para que, los grupos insurgentes equiparen la fuerza del Estado (Hoffman & Mattis, 2005). Por otro lado, el terrorismo ha sido utilizado en contra de la población civil, buscando sembrar miedo y con el fin de forzar su voluntad. En este sentido, estos nuevos actores de los conflictos recurren a métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, el caso colombiano no ha sido ajeno a esta realidad, pues grupos insurgentes han recurrido a métodos como el uso de explosivos en contra de la población civil, el secuestro, los asesinatos selectivos, entre otros. A su vez, desde el 2001, el terrorismo ha sido una amenaza constante alrededor del mundo, provocando cada año más muertes y más países afectados.

En cuanto al terrorismo como hecho reprochado por el derecho, a nivel nacional este es penalizado como delito. Sin embargo, a nivel internacional, la cooperación en la lucha contra este se ha dificultado por la falta de una definición única del termino terrorista. Distintos autores y organizaciones internacionales han buscado darle un significado, con diferentes componentes o requisitos, resultando en un tratamiento difícil a nivel internacional de los actos de terrorismo. A su vez, diferentes convenciones internacionales han buscado regular y penalizar actos concretos de terrorismo como la toma de rehenes o el secuestro de aviones, mas no existe una convención internacional, acogida por la totalidad de Estados, que defina el terrorismo. Sin embargo, existen algunos instrumentos de entes regionales que han definido al terrorismo, definición que aplica para los Estados miembros de dichas organizaciones. Esto no solo significa un problema para el

derecho internacional sino para la política internacional, pues la ambigüedad en la definición y el trato al terrorismo ha permitido que algunos Estados continúen apoyando y patrocinando estos grupos.

El Derecho Internacional Humanitario, a través de los instrumentos que lo regulan, busca regular los conflictos armados y el comportamiento de las fuerzas combatientes en este. Su principal objetivo es la distinción y protección de los no combatientes, y la prohibición del sufrimiento innecesario de aquellos que participan de los conflictos (CICR, 2010). A su vez, el Derecho Internacional Humanitario regula estos asuntos en el curso de conflictos armados internacionales y nacionales, sin importar la causa o justificación del conflicto, este rige para todos los conflictos. Ahora bien, esta rama del derecho internacional tiene la vocación de regir en todos los conflictos armados sin importar su naturaleza; sin embargo, algunos de los grupos insurgentes terroristas no se rigen por las normas de esta rama del derecho, creando una desigualdad entre las fuerzas del Estado y las de dichos grupos. Por el contrario, dichos grupos se encuentran avocados a forzar a un gobierno o a una entidad internacional a cumplir con su voluntad, recurriendo a cualquier medio. Estos medios pueden tener como objeto ataques hacia la población civil y a otros no combatientes, así como el uso de armas no convencionales que de alguna manera violan los principios del Derecho Internacional Humanitario.

Colombia no ha sido ajena a esta problemática. El Conflicto Armado ha visto diversas violaciones al Derecho Internacional Humanitario por los diferentes grupos insurgentes que han intervenido en este, tales como grupos guerrilleros y paramilitares. Estos grupos han emprendido una guerra en contra del Estado con el objetivo de obligarlo a cumplir su voluntad política, forzarlo a una mesa de diálogo, tomar medidas de justicia por sus propios medios, o provocar un

cambio en el sistema político vigente. Las leyes colombianas penalizan los actos de terrorismo y las violaciones al Derecho Internacional Humanitario, aun así, las fuerzas del Estado se encuentran combatiendo grupos que no se rigen por estas normas, algo que dificulta su actuar. La suscripción de tratados y convenciones del Derecho Internacional Humanitario obliga a los Estados a cumplir las protecciones de las que se había hablado antes en el marco de un conflicto. Aun así, el actuar de las fuerzas legítimas de un Estado se ve afectado, así como su efectividad, por dichas regulaciones.

No hay duda de que Colombia y el mundo seguirán enfrentándose al terrorismo, el cual se convirtió en uno de los principales peligros para la seguridad internacional. Este cambio puede exigir que el Derecho Internacional Humanitario, y todas las reglas que rigen al conflicto armado, se adapten a estas nuevas condiciones. Si bien está claro que se debe exigir un actuar más riguroso y más respetuoso del derecho y garantías al Estado, el Derecho Internacional Humanitario se ha convertido en una camisa de fuerza que, en algunos casos, puede poner en entredicho los resultados de las operaciones antiterroristas. La solución a este problema no debe consistir en la renuncia total al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario ya que no es posible pensar en el abandono total de estas reglas o protecciones, mas sí es posible concebir una nueva forma de regular el conflicto, pues si la naturaleza del conflicto ha cambiado, las normas que lo regulan deben adaptarse a esta nueva realidad. Es así como se debe cuestionar la posibilidad de reformar las normas del Derecho Internacional Humanitario.

En este sentido el objetivo central de este texto será el de examinar si existe la necesidad de reformar o reformular la manera en la que el Derecho Internacional Humanitario interactúa con actores terroristas. Estos actores terroristas actúan dentro del marco de un conflicto armado

no internacional como partes no estatales, es decir, no se contempla el terrorismo de Estado, el cual tiene repercusiones más claras dentro del marco de los crímenes de guerra. Como ya se ha mencionado, existe una disparidad en la exigibilidad y aplicación de normas del conflicto armado en casos de enfrentamientos no internacionales, esto entre grupos insurgentes terroristas y las fuerzas armadas de un estado; esta falta de igualdad radica en que los grupos terroristas cometen una serie de violaciones o desconocen al Derecho Internacional Humanitario, mientras que los ejércitos estatales están obligados a cumplirlas.

No obstante, este objetivo debe ser examinado dentro del contexto de terrorismo y conflicto. De esta manera se deben considerar las características actuales de los conflictos armados, los cuales han sufrido algunos cambios relevantes para el objeto de estudio de este texto. A su vez, es importante tener en cuenta los esfuerzos que se han realizado desde la doctrina y algunas organizaciones internacionales por regular y definir el terrorismo, algo que ha demostrado ser un reto; no obstante, a nivel de algunas organizaciones regionales se ha logrado encontrar una definición, por ende, se ha regulado, y así se ha acercado a lograr asignarle al terrorismo una definición general.

En este sentido, este texto comenzará por analizar la naturaleza de los conflictos armados modernos. Estos conflictos armados han visto una participación creciente de actores no estatales, los cuales, en la mayoría de los casos, recurren a tácticas y métodos terroristas. A su vez, uno de los principales cambios que sufrido el conflicto armado es la disminución de enfrentamientos interestatales, esto como consecuencia de una serie de factores que han provocado un abandono por la guerra con el fin de resolver controversias por parte de los Estados. Esto ha significado a su vez un aumento en los conflictos armados irregulares. De igual manera, el texto hará un breve

análisis sobre la relación que tiene el terrorismo con los crímenes internacionales, pues aquellos que recurren a este podrán ser objeto de responsabilidad penal internacional.

A su vez, se continuará por establecer cuál o cuáles han sido las definiciones que se le han dado al terrorismo. Como ya se dijo anteriormente, este punto ha presentado un desafío a nivel global, pues a causa de razones que se explorarán más adelante, no ha sido posible lograr un consenso sobre la definición del terrorismo. En el mismo sentido, ha habido un tratamiento diferencial entre los actos aislados de terrorismo y aquellos actos que tienen una conexidad con organizaciones fundamentalistas. Así, es posible extraer ciertos factores comunes a las definiciones de la doctrina, así como de algunas organizaciones regionales que han regulado el asunto.

Ahora bien, atendiendo el punto central de este texto, se finalizará el contenido de este haciendo un análisis sobre la relación entre el terrorismo y el Derecho Internacional Humanitario. Con ese propósito, se hará un recuento de los postulados de las normas del conflicto, específicamente los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. De igual manera, se buscará describir el rol que los grupos terroristas, así como sus integrantes, juegan dentro del marco de esta rama del derecho internacional. Este rol entendido como la aplicación de estas normas por parte de estos sujetos y los retos que esta cuestión presenta. A su vez, se evaluará el estatus que el Derecho Internacional Humanitario otorga a los actores terroristas no estatales, un asunto que no ha sido pacífico entre la comunidad internacional. De esta forma, el texto terminará con algunas conclusiones a las que se pueden llegar con lo expuesto anteriormente.

## 1. Naturaleza de los conflictos modernos

### 1.1. La guerra justa y la prohibición de la guerra

El desarrollo de la humanidad como es conocida ha estado estrechamente ligado al conflicto y a la guerra en sí. Desde la antigüedad, los Estados han recurrido a la guerra con diferentes objetivos o razones. Estas razones han sido objeto de cambio y han sido limitadas por los mismos Estados, los cuales han optado por abandonar, en ciertas circunstancias, el uso de la fuerza armada para resolver sus controversias. Ha habido autores, como el holandés Hugo Grocio, quienes han argumentado que en algunos casos la guerra es necesaria y justificada (Hathaway & Shapiro, 2017). Sin embargo, fue después de la Primera Guerra Mundial, que las grandes potencias mundiales se reunieron con el objetivo de redactar un acuerdo que prohibiera la guerra como mecanismo de resolución de controversias. Este acuerdo sin precedentes en su impacto fijó el camino para la regulación internacional de la guerra y su consecuente prohibición. En este sentido, vale la pena ver el desarrollo de la regulación de la guerra.

En 1603, después de un incidente entre una flotilla de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y un buque portugués, el Santa Catarina, en el que la primera atacó a la segunda en el Estrecho de Singapur, Hugo Grocio fue convocado por la compañía comercial holandesa para defender la acción referida. Las naves holandesas habían atacado al Santa Catarina y habían tomado sus bienes como botín y a sus pasajeros como rehenes. Es importante aclarar entonces, que, para el momento de los hechos, Holanda no estaba en un estado de guerra con Portugal. Así, Grocio redactó un documento en el cual emprendió la defensa del capitán holandés que había ordenado el ataque sobre la nave portuguesa, argumentando que este no podía ser considerado un

pirata, lo que hubiera hecho el ataque y la toma de los bienes ilegales, sino que debía ser considerado como un soldado, teniendo este las mismas competencias de uno. Ahora bien, el capitán holandés no estaba actuando bajo la autorización ni representación de un Estado soberano; sin embargo, para Grocio, este no las necesitaba (Hathaway & Shapiro, 2017). Así, argumentó que una compañía privada podía iniciar una guerra bajo su propia autoridad. Este planteamiento cambió la forma en la que se concebía la guerra, y cambió el paradigma sobre esto por los siglos siguientes.

Bajo esta misma lógica, Grocio argumentó que la guerra no solo era justa, sino necesaria para diferentes intereses nacionales, lo que resultó en uno de los primeros planteamientos sobre la guerra justa. Uno de los fines para los cuales la guerra sería justificable era para defender el territorio (Hathaway & Shapiro, 2017). Esta declaración de Grocio, sería uno de los antecedentes para la legítima defensa de los Estados. Cuando un Estado es víctima de un ataque, donde su territorio se ve amenazado por las acciones armadas de otro Estado, este está en su completo derecho de responder para eliminar la amenaza. Una segunda razón que Grocio expone dentro de la guerra justa era la de defender vidas, en este caso de los ciudadanos de un Estado (Hathaway & Shapiro, 2017). Es decir, cuando las vidas de sus ciudadanos se ven amenazadas por el accionar de otro Estado, el Estado víctima podría responder para proteger a sus nacionales. Los dos planteamientos anteriores ya habían sido planteados antes por otros autores; sin embargo, Grocio propuso una nueva justificación, alegando que la guerra era justificada para intereses económicos (Hathaway & Shapiro, 2017), algo relacionado al incidente de la flotilla holandesa en Singapur. De igual manera, Grocio propuso que dentro de la guerra justa se encuentra la posibilidad de recurrir al conflicto armado para perseguir criminales que no han sido penalizados. Con esta última razón, existe una relación estrecha con algunas intervenciones modernas en marco del

terrorismo, donde un Estado interviene en otro con el fin de judicializar al responsable de un ataque terrorista en su territorio.

Si bien los Estados ya recurrían a la guerra por fines económicos, Grocio lo incluyó en su teoría de la guerra justa. De esta manera, la guerra sería razonable para cobrar “lo que se debe” (Hathaway & Shapiro, 2017, p. 9). Así, un Estado tendría pleno derecho de iniciar una guerra o una acción armada contra otro Estado con el fin de cobrar un préstamo en caso de que esta no sea pagada, un ejemplo de esto son los diferentes bloqueos navales que se dieron en el Siglo XIX como resultado del vencimiento de los préstamos internacionales. A su vez, la guerra también estaría justificada para casos donde la propiedad de un Estado es tomada de manera ilegal y esta debe ser recuperada. Para Grocio la guerra también estaría justificada para asegurar la compensación por un daño causado por otro Estado (Hathaway & Shapiro, 2017).

Es claro que las posiciones adoptadas por Hugo Grocio hacían parte de una concepción tradicionalista sobre la guerra desarrollada previamente en Europa. Autores como Cicerón, Santo Tomás de Aquino, y San Agustín de Hipona, tenían diferencias en cuanto a las circunstancias en la que se debían dar las guerras; sin embargo, todos defendían, al igual que Grocio, el derecho de los Estados de recurrir a esta. Estos autores también convenían en que la función esencial de la guerra era responder a una amenaza y que se debía recurrir a esta cuando las demás opciones pacíficas se hubieran agotado (Hathaway & Shapiro, 2017). Así, tal como sus antecesores, Hugo Grocio aceptó que la guerra no debía ser viable si un Estado no ha violado o amenazado de violar algún derecho de otro Estado, de aquí la denominación de “justa” de la guerra. Así, Grocio aseveró que todos los seres humanos nacen con el derecho de defender sus derechos, los cuales podrán ser mediante una corte o mediante su equivalente, la guerra. Esta última entendida como



el derecho de recurrir a la violencia para defenderse, ya sea a nivel estatal o nivel personal; entre ciudadanos de un mismo Estado supondría un reto, por lo que se recurre al contrato social y se encarga al Estado para resolver controversias; sin embargo, a nivel internacional los particulares estarían facultados para recurrir a la violencia bajo su propia autoridad, en lo que Grocio llamó “guerra privada” (Hathaway & Shapiro, 2017).

Ahora bien, Grocio y sus antecesores en la teoría de la guerra justa revolucionaron el paradigma sobre las razones en las cuales los Estados podrían ir a la guerra. Esto no solo creó la concepción de que los Estados tenían derecho de recurrir a la guerra, sino que también creó la concepción de que existían razones en las cuales estos no podrían hacerlo. Así, de la misma forma en la que se propuso que los Estados tenían el derecho de hacer uso de acciones armadas cuando sus derechos eran objeto de violaciones o amenazas, estas serían injustas cuando dichas amenazas o violaciones fueran inexistentes. Por otro lado, las declaraciones de Grocio fueron publicadas en un panfleto en defensa del ataque de la flotilla holandesa en Singapur, mas no fueron parte de algún instrumento de derecho internacional que de alguna manera obligara a los Estados a cumplir sus postulados. Así, si bien Grocio fijó la ruta a seguir en cuanto a la guerra justa y por consiguiente el abandono de la guerra en ciertas circunstancias, esto resultó insuficiente en distintos escenarios.

Aproximadamente 300 años después del incidente en el Estrecho de Singapur en el que Grocio planteó los escenarios de la guerra justa, en 1914, Europa y el mundo se vieron sumergidos en el mayor conflicto hasta la fecha, la Primera Guerra Mundial. Este conflicto que vio a las más grandes potencias mundial enfrentadas como resultado del auge del nacionalismo terminó con 37.4 millones de víctimas entre bajas, heridos, y prisioneros de guerra (Royde-Smith

& Showalter, 2019), pero también concluyó con la creación de la Sociedad de Naciones en 1919. Esta nueva organización internacional tenía como objetivo prevenir otra catástrofe como la de la Primera Guerra Mundial, por esto, consagró en su Pacto restricciones a la guerra. Así, el artículo 12. El Pacto de la Sociedad de Naciones (2019) enunciaba:

Los miembros de la Liga convienen en que, si se produjera entre ellos alguna divergencia que pudiese conducir a una ruptura, someterán el asunto al arbitraje o a la encuesta del Consejo; conviniendo en no recurrir en caso alguno a la guerra antes de los tres meses de haberse producido el fallo por los árbitros o el informe por el Consejo.

Este tratado internacional, aunque no incluía a todas las grandes potencias, consitió en un avance para la regulación de la guerra. Ahora, si bien desde la época de Grocio los Estados habían comenzado a usar la guerra como última medida, este fue el primer tratado que consagró dicha restricción.

Ahora bien, fue en 1928 cuando en efecto se prohibió el uso de la fuerza para resolver controversias internacionales. El denominado Pacto Kellogg-Briand o Pacto de París de 1928 fue el instrumento mediante el cual se condenó el uso de la fuerza y se renunció a esta como un instrumento en el derecho internacional (Fuentes, 2014). El Pacto condenaba la guerra de agresión, autorizando así a los Estados a recurrir a la fuerza en su propia defensa, en defensa de otros, o inclusive en defensa del Pacto (Hathaway & Shapiro, 2017). Con el fin de darle un mecanismo de exigibilidad al Pacto, Hathaway y Shapiro (2017) explican que, si algún Estado violaba la prohibición consagrada en el Pacto, los demás Estados “serían liberados y podrían tomar las medidas que consideren adecuadas para la nación beligerante” (p. 127). 15 países

hicieron parte del Pacto, entre ellos Japón, Alemania, e Italia, en el mismo sentido otros 40 países se adhirieron posteriormente (Pacto Kellog-Briand, 1928).

Sería entonces en 1931 cuando por primera vez el Pacto Kellog-Briand tendría un reto mayor, la invasión japonesa de Manchuria. Esta región, la cual hacía parte de la República de China, era rica en recursos que Japón necesitaba, así, después de un dudoso incidente internacional en Mukden, Japón anexó la región, ocupando una gran porción del territorio chino en Manchuria. Esta invasión, al ser el resultado de un incidente en el que supuestamente una compañía de ferrocarriles japonesa fue atacada por los chinos, encajaría en la definición de legítima defensa, consagrada por el Pacto; sin embargo, esta fue denunciada por los representantes chinos ante la Sociedad de Naciones como una agresión ilegal. Este no sería el único reto que enfrentaría el Pacto y a su vez, la Sociedad de Naciones. Después de la invasión, la Sociedad formó una comisión para analizar si la invasión japonesa constituía un caso de legítima defensa, esta concluyó de manera negativa, por ende, la invasión japonesa habría sido ilegal. En respuesta a esto Japón se retiró de manera definitiva de la Sociedad de Naciones (Hathaway & Shapiro, 2017). Los Estados miembros de la Sociedad, respondieron a la invasión con la imposición de un embargo al territorio recién conquistado por Japón.

Los problemas de la Sociedad de Naciones, que ponían en entredicho al Pacto de 1928, reaparecieron con una serie de eventos en la década de 1930. El primer reto post-Manchuria provino de Alemania. Tras una campaña llena de violencia y propaganda, el Partido Nacional Socialista, Nazi, obtuvo una mayoría en el Parlamento Alemán, logrando posesionar a Adolf Hitler como Canciller del país. En uno de sus primeros movimientos en la arena internacional, Hitler retiró a Alemania de la Sociedad de Naciones, retirándose a su vez, de todos los acuerdos y

convenios pactados en la organización. Con esto, Alemania no solo abandonó el foro multilateral más importante de la fecha, sino que dejó al mundo sin forma alguna de cuestionar sus actuaciones. Un segundo evento que puso en jaque a la Sociedad de Naciones y al Pacto Kellogg-Briand, fue la Crisis de Abisinia entre el Imperio de Etiopía y la Italia de Mussolini. En 1935, fuerzas italianas en Somalia y soldados etíopes se enfrentaron en escaramuzas que dejaron alrededor de 150 muertos. Por esta razón, los representantes de Etiopía denunciaron el evento como una agresión deliberada de Italia ante la Sociedad de Naciones, entidad que resolvió no tomar partido y absolver a ambas partes. Posterior a su absolución, Italia invadió Etiopía, anexando parte del territorio a sus posesiones en África. Al denunciar esta nueva agresión ante la Sociedad de Naciones, el emperador de Etiopía fue ignorado, pues esta organización no tomó ninguna medida contundente para reversar la invasión italiana (Hathaway & Shapiro, 2017).

Otro suceso que supuso un reto al Pacto de 1928 fue la invasión japonesa de China en 1937. El Imperio de Japón, el cual ya había anexado parte de China en 1931, invadió nuevamente el territorio chino luego de otro dudoso incidente cerca de Beijing. Nuevamente, los representantes chinos en la Sociedad de Naciones se encontraron con la inactividad de la organización y de sus miembros ante la amenaza japonesa, la cual avanzó rápidamente en el territorio chino. Debido al rápido avance de los soldados japoneses, el líder chino, Generalísimo Chang Kai-shek, abandonó Nanking, capital de la República de China. A su llegada a la ciudad, los japoneses emprendieron una campaña de barbarie en contra de la población civil en una magnitud nunca vista; se estima que, en las seis semanas posteriores a la captura de la ciudad, 200.000 civiles habían sido violadas y asesinadas por el ejército imperial (Hathaway & Shapiro, 2017). Este evento demostró que el Pacto de 1928 no cumplió su principal objetivo, proteger al mundo de un conflicto a gran escala. Este fracaso sería confirmado en 1939 con la invasión

alemana de Polonia. La Segunda Guerra Mundial significó el fracaso total de la Sociedad de Naciones y del Pacto Kellog-Briand. Sin embargo, después del fin de la guerra, las potencias aliadas acordarían crear una nueva organización internacional, la Organización de Naciones Unidas, la cual tendría la capacidad de evitar los errores cometidos por la Sociedad de Naciones. A su vez, el documento de creación de esta organización tendría en su contenido la prohibición de la guerra propuesta por el Pacto Kellog-Briand en 1928, siendo este su antecedente más importante.

### 1.2. Terrorismo y *Ius ad bellum* en la Carta de las Naciones Unidas

Junto al desarrollo de la prohibición de la guerra mencionado anteriormente, y con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional plasmó en la Carta de las Naciones Unidas las razones por las cuales los Estados podrían recurrir a la fuerza. De esta manera, el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas (1945) dispone:

Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

En la misma Carta, los Estados miembros de las Naciones Unidas redactaron los escenarios en los cuales el uso de la fuerza estaría permitido. Así, en el Capítulo VII de la Carta se consagró la posibilidad de recurrir a la fuerza en caso de autorización o mandato por parte del Consejo de Seguridad en casos donde exista una “amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de

agresión” (Organización de las Naciones Unidas, 1945. Artículo 39). En el mismo capítulo, los Estados miembros reconocieron la importancia de respetar el derecho a la legítima defensa de los Estados, lo que significa que, en caso de una agresión por parte de un estado, el Estado agredido tiene el derecho de responder a este mediante el uso de la fuerza. Estos dos artículos explican en parte el abandono de la guerra por parte de los Estados.

Los mencionados instrumentos hacen parte de lo que se conoce en el derecho internacional como *ius ad bellum*, o el derecho de ir a la guerra, diferente del *ius in bello* o derecho en la guerra, mejor conocido como Derecho Internacional Humanitario (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010). El *ius ad bellum* ha tenido un desarrollo teórico controversial, pues este ha sido cuestionado o se ha sido objeto de intentos de cambios, desde la redacción de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. De manera consecuente, este enfrenta un reto más reciente, el crecimiento del terrorismo (Lietzau, 2004). Cuando la Convención de San Francisco de 1945 acordó permitir la legítima defensa en casos de ataques por otros Estados, buscó asegurar un mecanismo de defensa para ataques semejantes a los de la Segunda Guerra Mundial, esta forma de ataque desconocía los ataques modernos a los cuales se enfrenta el mundo hoy en día, por lo cual una respuesta armada a un ataque terrorista no encajaría en esta legítima defensa (Lietzau, 2004).

Sin embargo, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, el mundo ha sido escenario de intervenciones militares internacionales como respuesta al terrorismo, es así como la “guerra al terror” (ABC, 2001) ha sido el pretexto para el despliegue de contingentes militares, bombardeos, invasiones, entre otros; predominantemente las intervenciones en Afganistán e Irak. Así, estas intervenciones militares se han convertido en un mecanismo de prevención y de

respuesta frente al terrorismo. Los autores de las intervenciones militares contra terrorismo, en especial países de Occidente, han buscado responder a los ataques en su contra atacando las bases de operaciones de los grupos terroristas responsables en el extranjero. Si bien logran neutralizar en parte la capacidad de dichos grupos, estos funcionan a su vez como una disuasión para quienes planeen futuros ataques, así como para aquellos Estados que les brindan su apoyo. Es así como, según Lietzau, (2004) las incursiones militares y ataques en respuesta a un atentado terrorista funcionan también de manera preventiva.

En consecuencia, el paradigma de la legítima defensa propuesto por la Carta de las Naciones Unidas sufrió un cambio con dichas intervenciones. Una de las intervenciones más significativas, la intervención militar en Afganistán en el 2001, como respuesta al ataque del 11 de septiembre, significó un cambio para esta legítima defensa, pues el ataque no provino directamente de un ente estatal. Si bien Al Qaeda recibía apoyo de y se resguardaba en el Afganistán del régimen Talibán, este país no fue el perpetuador del ataque. Aun así, Estados Unidos, el Reino Unido, y una coalición de países, comenzaron una intervención militar que vio el fin del régimen talibán en el país asiático dos meses después (Britannica, 2019). Esta respuesta militar supuso no solo un quebrantamiento en el paradigma existente de la legítima defensa de los Estados, sino también un precedente que ha permitido la presencia militar Occidental en diversos países.

Frente a las intervenciones como respuesta ataques terroristas se ha argumentado que estas están destinadas a acabar con blancos terroristas, de igual manera, a atacar a aquellos países que apoyan al terrorismo. En el caso de Afganistán, como se mencionó en párrafo anterior, este Estado brindaba efectivamente resguardo y apoyo a Al Qaeda, lo cual era un blanco legítimo de

la invasión. Este argumento se fundamenta en que al prestar resguardo o brindar apoyo efectivo a algún grupo terrorista, estos Estados se convierten en cómplices de todos los ataques de dichos grupos (Cassese, 2001). El planteamiento de la legítima defensa contra ataques terroristas ha sido compartido por países como Estados Unidos, Israel, y Sudáfrica, quienes han recurrido a esta figura en Afganistán, el Líbano, y Namibia respectivamente; sin embargo, este argumento ha sido controvertido por otros países y sigue siendo poco aceptado. Aun así, afirma Cassese (2001) que, el día después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, todos los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todos los miembros del Consejo del Atlántico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), condenaron y aprobaron resoluciones instando a medidas contra lo sucedido, al punto que de otorgarle la naturaleza de ataque armado bajo el paradigma de la Carta de las Naciones Unidas.

Es claro que una de las principales amenazas en términos de seguridad que enfrentan los Estados modernos es el terrorismo. Los grupos terroristas normalmente cuentan con el patrocinio de un Estado, o inclusive son instrumentos de Estados. A simple vista y en principio, el concepto de *ius ad bellum* bajo la óptica de la Carta de las Naciones Unidas desconocería los ataques terroristas como algún tipo de ataque, por lo que un ataque contra un Estado como respuesta a estos sería contrario al derecho internacional. Sin embargo, las condiciones actuales y la naturaleza de los conflictos modernos permiten concluir que estas intervenciones contra el terrorismo deben afectar toda la cadena de responsabilidad, es decir, tanto a los grupos terroristas que perpetraron el ataque, como a los Estados y regímenes, e individuos que prestaron algún tipo de apoyo efectivo para el ataque.



Por otra parte, Müllerson (2015) argumenta que el terrorismo no debe ser una cuestión analizada desde el *ius ad bellum*, debido a que, para este autor, es un asunto de métodos, no de un sujeto. Este argumento tiene su fundamento en que este método puede ser susceptible de condena por parte del Derecho Internacional Humanitario, así como de penalización por el derecho penal, mas no constituir una razón de respuesta armada por parte de un Estado. Así, los Estados podrían ser autores de actos terroristas en el marco de un conflicto armado, ya que esto es un método y una forma de actuar. A su vez, existen ataques terroristas que serían imposibles de enmarcar bajo el *ius ad bellum* por su carencia de carácter internacional, por ejemplo, atentados provenientes de actores locales con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el “extinto” Ejército Republicano Irlandés (IRA). En cuanto a ataques de grupos extranjeros, sobre el *ius ad bellum*, el autor argumenta que se deben incluir bajo el Derecho Internacional Humanitario ya que los ataques terroristas buscan crear el mayor daño a la población civil, es decir, las bajas civiles del terrorismo no son colaterales, por el contrario, son los blancos de este (Müller, 2015). En este sentido, quienes cometan actos terroristas, en conflicto o fuera de este, estarían violando el Derecho Internacional Humanitario. Así, Müllerson (2015) asume una postura amplia frente al Derecho Internacional Humanitario al afirmar que este debe cobijar al terrorismo inclusive por fuera del conflicto. Sin embargo, esta rama del derecho se encuentra, en la mayoría de los casos, incluida en los regímenes penales nacionales, por lo que haría a los perpetradores de ataques terroristas penalmente responsables bajo ordenamientos nacionales, así como bajo el Derecho Internacional Humanitario.

Ahora bien, si bien Müllerson (2015) afirma que el terrorismo no debe constituir un acto de agresión que justifica una intervención armada en contra de un Estado, sí reconoce el derecho que tienen los Estados de defenderse de grupos terroristas extranjeros. Este autor afirma que, en

caso de que el Estado de donde provienen los ataques terroristas o que cuyo territorio es el lugar de origen del grupo terrorista, se demuestra incapaz, o en su defecto renuente a combatir dichos grupos, el Estado víctima debe tener el derecho a defenderse. Así, esta defensa debe tener como objetivo que cesen los ataques terroristas, no atacar al Estado “anfitrión” como tal; sin embargo, si este Estado ataca o de alguna manera impide dichas operaciones de defensa, podrá ser considerado cómplice del grupo terrorista. Un ejemplo de esto es la Operación Entebbe en 1976, donde un grupo de comandos israelíes iniciaron una misión de rescate de rehenes en Uganda, país que había fallado en liberar dichos rehenes y que al momento de la operación atacó a los comandos israelíes, lo que los convirtió, argumenta Müllerson (2015), en blancos de estos comandos.

Bajo la lógica de esta legítima defensa, se debe tener en cuenta que no cualquier ataque terrorista debe ser susceptible de un despliegue de fuerza por parte de un Estado víctima. Müllerson (2015) propone tres elementos que tiene un ataque terrorista y que lo diferencia de un ataque ordinario, a su vez, características que los convierten en justa causa de una respuesta armada. Estos elementos son referentes a los autores y su falta de afiliación a un Estado como tal, a su clandestinidad, y a sus métodos contrarios al Derecho Internacional Humanitario. Si bien más adelante se profundizará sobre esta diferenciación, estos tres elementos son suficientes para que un Estado invoque la legítima defensa, algo que debe ser proporcional también.

Aunque no existe total consenso entre académicos sobre si los ataques por parte de grupos terroristas extranjeros constituyen o no un acto de agresión, si parece existir una aceptación sobre el derecho de los Estados a defenderse de estos grupos. Existen algunos casos en los que la Carta de las Naciones Unidas considera el uso de grupos irregulares como actos de agresión; sin

embargo, en la mayoría de los casos, el patrocinio de grupos terroristas se da de manera clandestina, lo que imposibilita declarar las actuaciones de estos grupos como actos de agresión, así estos actúen bajo el patrocinio de un Estado. Esto no solo ha sido un cambio para la forma en la que los Estados hacen guerra, sino que ha significado un reto para el derecho internacional y la forma en la que ha regulado la guerra en tiempos modernos. Aunque el terrorismo no es algo de este siglo ni del pasado (Müllerson, 2015), las intervenciones para luchar contra este han tomado relevancia desde el 2001, tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington D.C.

### 1.3.Los conflictos modernos

De acuerdo con International Crisis Group (2019), existen alrededor de 80 crisis de seguridad o conflictos en el mundo. Este organismo destaca que en el planeta actualmente hay una serie de situaciones que de alguna manera amenazan la estabilidad y la seguridad de algunos países, regiones, y en algunos casos del mundo. Sin embargo, de este índice de conflictos solo cinco conflictos involucran o confrontan dos Estados directamente: 1) la Crisis de la Península de Corea (Corea del Norte y Corea del Sur), 2) Mar Meridional de China (concretamente China (República Popular), Vietnam, y Estados Unidos), 3) incidentes fronterizos entre Ruanda y Uganda, 4) incidentes fronterizos entre Ruanda y Burundi, y 5) el Conflicto en Cachemira (India y Paquistán). Ahora, aunque existen otros conflictos que ven enfrentados los intereses de múltiples Estados, y en casos a los Estados mismos, estos conflictos no pueden ser catalogados como interestatales. Conflictos internos como el colombiano y filipino, o de situaciones de terrorismo como Irak y Somalia, son episodios donde los Estados se enfrentan a insurgencias. De la lista de conflictos, los cuales están presentes en todos los continentes, solo hay dos que

presentan una situación en mejora, estos son los conflictos en Yemen y en Chad. El resto de los conflictos se encuentran en una situación estancada, o empeorando (International Crisis Group, 2019).

Ahora bien, si bien esta lista de conflictos de International Crisis Group (2019) muestra que el mundo sigue enfrentando un alto número de retos a la seguridad, también demuestra que no es común que haya confrontaciones directas entre Estados, pero sí la existencia de insurgencias participando en conflictos. La constante lucha contra grupos armados insurgentes en el Medio Oriente y en Asia, como el autodenominado Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL) o Al Qaeda, o contra guerrillas “comunistas” en América Latina como las FARC o Sendero Luminoso, demuestran que los principales riesgos para la seguridad mundial provienen de insurgencias. A su vez, estas insurgencias son categorizadas en la mayoría de los casos de terroristas por los métodos que emplean.

En este mismo sentido, el Council on Foreign Relations (2019), ha formulado una lista con los conflictos actuales. Esta lista está compuesta por un número más selecto de conflictos, y tienen en común que de alguna forma impactan los intereses de Estados Unidos. De estos 26 conflictos, solo 5 conflictos podrían considerarse interestatales: 1) Mar Meridional de China, 2) Península de Corea, 3) Cachemira, 4) Mar de China Oriental (China, Taiwán, y Estados Unidos), y 5) las tensiones en el Golfo Pérsico (Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, y Reino Unido). Vale la pena aclarar que en las tensiones del Mar de China Meridional y del Mar de China Oriental no ha habido una confrontación directa en este siglo entre ninguno de los actores. Así, el resto de los conflictos de la lista son conflictos internos, que, si bien pueden tener la participación

de actores extranjeros, como el caso de la guerra civil en Siria o el conflicto en Ucrania, sus orígenes son exclusivamente internos.

Al igual que en la lista de International Crisis Group (2019), la del Council on Foreign Relations (2019), demuestra que en temas de conflictos existe una tendencia a que estos sean entre Estados e insurgencias. La inestabilidad política en democracias frágiles que termina siendo escenario de un levantamiento armado, ha sido la constante en el Medio Oriente posterior a la Primavera Árabe (Council On Foreign Relations, 2019), prueba de esto son las situaciones de inestabilidad e insurgencia en Egipto, Irak, Liba, y Siria; siendo los últimos dos casos, ejemplos de guerras civiles. En el caso africano, la seguridad de diversos Estados se ve amenazada por grupos insurgentes como Al-Shabab en Somalia, Boko Haram en Nigeria, o el Grupo para el Apoyo del Islam y los musulmanes en Mali, grupo afiliados a Al Qaeda. De acuerdo al Council On Foreign Relations (2019), en el resto del mundo la situación es similar, las principales fuentes de riesgo provienen de insurgencias armadas, no de conflictos entre Estados.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2016) asegura que, si bien los conflictos globales han disminuido, estos se han adaptado a las nuevas dinámicas mundiales. Así, el mundo post Guerra Fría, ha sido escenario de conflictos internos, y en algunos casos externos, afectados por la globalización y el juego de poder actual. Sin embargo, existen conflictos cuyas raíces son de años atrás, sobre esto ACNUR (2016) asegura que:

Los elementos económicos, políticos, ideológicos, culturales y religiosos continúan siendo las principales causas de las guerras que presenciamos en la actualidad. Muchas de ellas

tienen raíces antiguas y son en realidad la prolongación de disputas que tuvieron lugar en momentos anteriores de la historia. Otras, en cambio, han surgido tras el orden mundial que se impuso desde 1948.

En este sentido, los conflictos internos actuales no solo son coyunturas resultantes de las dinámicas del Siglo XX y de la Guerra Fría, también son resultado de disputas antiguas, las cuales no han sido resueltas por las partes en años.

Para ACNUR (2016), los cinco conflictos que amenazan la estabilidad mundial son: 1) la guerra en Siria, 2) el conflicto en la República Centroafricana, 3) la guerra en Sudán del Sur, 4) la guerra en Yemen, y 5) el conflicto armado en Colombia. Así, se puede constatar que, de estos cinco conflictos, la totalidad son internos, al menos en su origen. La lista de ACNUR, al igual que las anteriores, demuestra que actualmente, los conflictos, al menos lo de mayor relevancia, son de origen interno. Es claro que en conflictos como los de Yemen y Siria, ha habido participación de actores externos como Arabia Saudita y Rusia respectivamente; sin embargo, la raíz de los conflictos en cuestión es estrictamente interna. Igualmente, los cinco conflictos mencionados por ACNUR (2016) han sido el resultado del levantamiento armado de insurgencias. A su vez, algunos de los conflictos que enuncia ACNUR, han tenido participación de organizaciones o actores que son considerados terroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos (Rollins, 2019), e inclusive por el Ministerio de Seguridad Pública de Canadá (Public Safety Canada, 2019), como lo es el caso de las FARC en Colombia. No obstante, la mayoría de los conflictos citados anteriormente, son de carácter no internacional, o niquiera son conflictos armados, pues corresponden a tensiones internacionales, mas no a un enfrentamiento como tal entre dos Estados.

Así, al tener en cuenta que la mayoría de conflictos contemporáneos no responden a enfrentamientos entre Estados, se puede entender que el monopolio de la fuerza, una de las características inherentes a los Estados, no está del todo en cabeza de estos. Gallego (2004) expone como una de las cualidades de los Estados es el uso de la fuerza para ejercer control dentro de la sociedad, para salvaguardar la vida e impedir que sean los ciudadanos quienes hagan uso de la violencia. Sin embargo, es claro que este monopolio no es absoluto del Estado, pues existen una serie de organizaciones criminales, insurgentes, paramilitares, entre otras, que hacen uso de la fuerza y que ejercen control de partes de la población valiéndose de dicha violencia (Gallego, 2004). De esta forma, varios de los conflictos citados anteriormente dan fe de esto, pues en estos participan distintos actores insurgentes, tal como en la guerra en Siria o en Colombia.

Con relación a la guerra moderna y al monopolio de esta, el académico estadounidense William Lind propone diferenciar las etapas en las que la guerra moderna se ha desarrollado. Lind (2004), hace alusión a las cuatro generaciones en las que se ha dado la guerra moderna. Vale la pena aclarar que el concepto de guerra moderna inicia a partir del fin de la Guerra de los 30 Años en 1648, con la denominada Paz de Westfalia. Estas generaciones han tenido cierto impacto o aporte a la forma en la que se desarrollan los conflictos. Existen elementos que han perdurado desde la primera generación de la guerra, así como otros que han desaparecido. La consideración o estudio de esta teoría resulta importante debido a que es una manera de explicar la naturaleza de los conflictos actuales desde la historia de estos.

En este sentido, la primera de estas generaciones, la cual cubriría desde 1648 hasta 1860, tiene su relevancia en la introducción del orden y la cultura militar. Marcada por tácticas de línea

y columna, esta generación tuvo en sí el mayor desarrollo del uso de uniformes militares y de estructuras sumamente organizadas. La segunda generación, la cual fue desarrollada por el ejército francés especialmente, principalmente durante la Primera Guerra Mundial, consiste en el uso masivo de fuego de artillería. Este uso concentrado de artillería resultaba en la destrucción del enemigo, lo que permitía a la infantería ocupar el territorio de manera más eficaz. Esta generación de la guerra sigue siendo relevante el día de hoy debido al cambio de la artillería por la aviación militar (Lind, 2004). Los conflictos modernos todavía son escenario del uso de la aviación militar, desde conflictos pequeños como el colombiano, hasta conflictos con una alta participación internacional como el de Afganistán. Si bien la segunda generación sigue afectando los conflictos modernos, Lind (2004) describe la tercera generación como la guerra de maniobras, altamente utilizada durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército alemán, bajo el nombre de blitzkrieg, o guerra relámpago. La tercera generación, a diferencia de las dos anteriores, no se basa en el orden militar o en el estricto cumplimiento de órdenes, esta busca crear iniciativa entre las unidades, dotándolas de cierta autonomía. Ahora bien, la última generación propuesta por Lind, la cuarta, es la que describe la guerra en la actualidad (Lind, 2004).

La cuarta generación de la guerra, de acuerdo con Lind (2004), es aquella en la que los Estados han perdido el monopolio del conflicto. Actualmente, las insurgencias son los protagonistas de la mayoría de los conflictos, no los Estados. Si bien es claro que los Estados siguen jugando un rol determinante en estos conflictos, estos ya no se enfrentan entre sí, por el contrario, los Estados se han visto obligados a cooperar para luchar contra las insurgencias. La guerra contra las insurgencias ha obligado a los Estados a reformular sus políticas de seguridad tanto externas como internas, ya que existen casos de grupos insurgentes capaces de perpetuar ataques a un nivel internacional (Lind, 2004). La guerra contra las insurgencias no es exclusiva



de una región en específico, Lind (2004) afirma que a lo largo del mundo, los militares de los Estados se encuentran luchando oponentes no estatales como Al-Qaeda, Hamas, Hizbulá, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De estos grupos insurgentes mencionados a título de ejemplos por Lind, todos están incluidos en la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos (Rollins, 2019). Lind (2004) establece a su vez, que estas insurgencias están fundadas en ideologías, de esta forma los conflictos dejan de tener su fundamento en la estrategia y se convierten en una lucha de ideologías y posiciones radicales.

Sobre la misma línea en la que Lind (2004) afirma que los conflictos modernos responden al levantamiento de insurgencias armadas, Bryan Acuña, académico costarricense, asegura que el mundo se enfrenta a una serie de conflictos entre fuerzas estatales y ejércitos no estatales (Acuña, 2017). Acuña hace alusión al concepto de “guerra híbrida”, propuesto inicialmente por Mattis y Hoffman (2005); este tipo de guerra es la respuesta de actores estatales y no estatales a la hegemonía militar de Estados Unidos. Para Mattis y Hoffman (2005) Estados Unidos tiene superioridad en términos de conflictos convencionales, es por esto por lo que sus adversarios se adaptan a mecanismos irregulares; haciendo uso de nuevas tecnologías, de tácticas no convencionales, de guerra de guerrillas, inclusive de métodos terroristas para intentar igualar la superioridad militar estadounidense. Si bien el concepto de “guerra híbrida” fue propuesta en el caso de Estados Unidos, este se vuelve aplicable para todos los Estados. Es así como las insurgencias se han convertido en los protagonistas de los conflictos modernos.

Teniendo en cuenta los planteamientos de Mattis y Hoffman (2005), Acuña (2017) reconoce que la “guerra híbrida” da paso a la informalidad en los campos de batalla. Esta irregularidad se traduce en el abandono del uso de insignias o uniformes para mezclarse entre la

población civil, el uso de estructuras civiles para lanzar ataques, el empleo de factores psicológicos para lograr ventajas, entre otros. Además de la mencionada irregularidad, se adiciona un factor: el patrocinio por parte de actores estatales a estos grupos irregulares. Actualmente existen cuatro países designados como patrocinadores del terrorismo por el Departamento de Estado de Estados Unidos (2019); estos Estados son Irán, Corea del Norte, Siria, y Sudán. A su vez, este tipo de guerras puede suponer un reto en temas de responsabilidad debido a la ambigüedad de la información y de los mecanismos empleados, tanto por parte de los grupos insurgentes como de los actores estatales que los enfrentan (Acuña, 2017).

En el mismo sentido, en su artículo “Conflictos Modernos”, Acuña (2018) distingue dos factores que son determinantes para analizar la guerra de insurgencias y los conflictos modernos. El primer factor es la naturaleza volátil de estos conflictos, lo que significa que no pueden ser tratados de manera convencional, en palabras de Acuña (2018):

(...) las condiciones del conflicto no cuentan con una base de análisis lineal sino que por el contrario, los estudios deben pasar por una especie de bucles de información, donde la reprogramación de los eventos generan cambios que resultan significativos para modificar perspectivas que se daban por sentadas.

Esto se traduce en que los conflictos modernos no pueden ser analizados bajo la misma perspectiva de los conflictos convencionales. El desarrollo de los conflictos de insurgencias, no responden a convenciones militares impuestas sobre soldados, por el contrario, responden a la naturaleza humana de sus combatientes, que están guiados en ciertos escenarios por cuestiones religiosas o fundamentalistas (Acuña, 2018). Un ejemplo de esto fue la expansión de ISIL en el

Medio Oriente, su rápido crecimiento se dio por el uso de tácticas no convencionales en cuanto a asuntos militares, como ataques terroristas y el uso de los llamados lobos solitarios, acompañado de una campaña de relaciones públicas y empleo de medios de comunicación sin presentes entre otros grupos terroristas. Así, los Estados se encontraron en una posición reaccionaria, al ser imposible anticipar las movidas de este grupo terrorista.

El segundo factor determinante que enuncia Acuña (2018), es referente al territorio escogido por las insurgencias en estos conflictos. Generalmente, los grupos insurgentes buscan efectuar ataques que desestabilicen a sus contrincantes estatales, por esto recurren a ataques que busquen crear incertidumbre sobre el lugar de donde provino, tanto entre la población y la opinión pública, como en los mismos gobiernos. De esta forma los grupos irregulares aprovechan los vacíos de poder en el territorio para establecerse allí y poder tener una cierta zona de operación. Es así como estos grupos coordinan desde dichos territorios ataques que no generen una capacidad de reacción inmediata en los Estados debido a la imposibilidad de ubicarlos (Acuña, 2018). A su vez, en caso de que estos grupos sean patrocinados por un Estado, las bajas que este conflicto reporte serían bajas de insurgentes nacionales del Estado en conflicto, no del Estado patrocinador, un ejemplo de esto es la intervención rusa en el conflicto del este de Ucrania, en la que las bajas han sido estrictamente ucranianas, pero donde es claro que Rusia ha intervenido en pro de los separatistas (Global Conflict Tracker, 2019).

Para Acuña (2018), los medios de comunicación comenzaron a jugar un papel de alta importancia en estos conflictos. La propaganda y los medios pueden ser utilizados para mostrar a los grupos insurgentes como víctimas de las respuestas estatales, utilizando “términos que agraven las circunstancias de cara a la opinión pública, por ejemplo «masacre», «matanza», etc. que

generaría críticas para quien responda” (Acuña, 2018). De la misma forma, el uso de medios de comunicación puede enviar mensajes ambiguos en los que los grupos insurgentes pueden aparecer como vencedores, enviando un posible mensaje de terror entre la población. A su vez, el uso de redes sociales se ha vuelto un arma fundamental en los conflictos modernos, para todos los actores; la opinión pública y la forma de ser percibidos por la población, juega un papel fundamental para lograr ciertos objetivos del conflicto (Acuña, 2018).

Si bien hay quienes argumentan que los conflictos entre Estados han disminuido, lo cual se refleja en los conflictos existentes, hay quienes argumentan que, de hecho, la generalidad de los conflictos ha disminuido. La teoría de la Larga Paz (*Long Peace*) argumenta que el mundo cada vez es más pacífico, con una disminución radical de los enfrentamientos entre Estados desde la Segunda Guerra Mundial (Powell, 2012). A lo largo del Siglo XX, las grandes potencias optaron por participar de conflictos menores, en países en vía de desarrollo en vez de enfrentarse entre sí. Es de esta manera como el mundo cada vez es más pacífico en términos de guerras entre Estados, Michael Price (2018) explica:

Los antropólogos y los politólogos han argumentado que varios acontecimientos del siglo XX han disminuido el riesgo de conflictos interestatales a gran escala, incluida la propagación de la democracia, el aumento de la interdependencia económica y la amenaza de la aniquilación nuclear mutua.

Si bien estas dinámicas responden a la Guerra Fría, estas se mantienen en la actualidad, ya que desde 1945, en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ninguna de las 10 economías más grandes se ha enfrentado entre sí (Powell, 2012). Existe una cierta cooperación internacional que ha

permitido que los Estados resuelvan sus controversias sin la necesidad de iniciar una guerra. También se debe tener en cuenta que, como se mencionó anteriormente, factores como la penalización de crímenes de agresión y la prohibición de la guerra en casi la totalidad de situaciones, por parte de la Carta de las Naciones Unidas, han afectado el número de conflictos entre Estados.

En este sentido, los conflictos entre Estados han disminuido de 2.9 conflictos en promedio entre 1980 y 1989, a 0.7 conflictos en promedio entre 2000 y 2011 (Simon Fraser, 2014). A su vez, las muertes resultantes de conflictos entre Estados cada vez son menos, siendo 246 por cada millón de habitantes en 1950, a ser menos de 10 por cada millón de habitantes en 2011 (Simon Fraser, 2014). Al ver la comparación de estos números, resulta innegable que el mundo tiende a ser más pacífico. Es así como Steven Pinker también argumenta que la violencia interpersonal también se encuentra en disminución (Powell, 2012). Así, si bien han existido grandes períodos de la historia en ausencia de conflictos mayores, el actual continúa siendo el más extenso.

Ahora, aunque el número de muertes y de conflictos entre Estados ha disminuido, es posible afirmar que el número de muertes o de víctimas por ataques terroristas ha aumentado. Prince (2012) argumenta que la teoría de la Larga Paz ha mostrado las cifras de muertes en conflicto sin tener en cuenta las muertes asociadas al terrorismo y a las guerras civiles. Si bien esta afirmación no es del todo cierta ya que hasta el 2011 las guerras civiles estaban disminuyendo, tendencia que fue frenada por el inicio de la Primavera Árabe y el resurgimiento de la violencia en el Medio Oriente y en Ucrania en el 2014 (Simon Fraser, 2014).

Por su parte, el terrorismo ha jugado su rol en las cifras de sus víctimas, aumentando en alta medida entre el año 2010 y el 2017 (Ritchie, Hasell, Appel & Roser, 2019). Si bien estas muertes no son el resultado de una guerra entre Estados, sí son el resultado de conflictos internos o de guerras de insurgencias. Así, en la última década 21.000 personas murieron en promedio por cada año a causa del terrorismo. La inestabilidad política y la permanencia en el tiempo de disputas internas, han fomentado el crecimiento o la supervivencia de grupos terroristas en África, el Medio Oriente, América Latina, y el Sudeste Asiático. El surgimiento de radicalismos religiosos, las intervenciones militares, y la globalización pueden ser las principales causas del aumento en el número de ataques terroristas, los cuales han llegado a ocurrir en países de Occidente como Estados Unidos y el Reino Unido. Así, las muertes por terrorismo aumentaron de 7.827 en 2007 a 26.445 en 2017, siendo el 2014 el año con más muertes por ataques terroristas con 44.490 muertes (Ritchie, Hasell, Appel & Roser, 2019). Si bien existe una mejoría con la situación en el 2014, los números de muertes por ataques terrorista sigue siendo alta en comparación con los años anteriores al 2000, y en comparación con las muertes por causa de la guerra. Una de las principales causas de la disminución de muertes a causa del terrorismo desde el 2014, es la campaña en contra de ISIL, iniciada en el 2014, las muertes atribuidas a dicho grupo terrorista se han disminuido en un 69% (Institute for Economics & Peace, 2019). Sin embargo, células afiliadas a este grupo terrorista siguen operando a lo largo del mundo, en países como Nigeria, Iraq, Somalia, y Filipinas.

En el mismo sentido, existe un estrecho vínculo entre el terrorismo y los conflictos, algo que demuestra la incidencia del primero en los conflictos modernos, y que refuerza las tesis expuestas anteriormente, ya que la mayoría de los grupos terroristas son insurgencias armadas en conflictos internos. Así, el 95% de las muertes por ataque terroristas ocurrieron en países en

situaciones de conflicto (Institute for Economics & Peace, 2019), tales como Afganistán, Irak, y Nigeria. De igual manera, el Índice Global de Terrorismo (Global Terrorism Index en inglés) del Institute for Economics and Peace (2019) asegura que “los grupos insurgentes usan el terrorismo como una táctica de guerra y tienen más probabilidades de atacar la infraestructura, la policía y el ejército estatal” (p. 5). La participación de grupos terroristas en conflictos no solo afecta el número de muertes en estos, el tiempo promedio de años en los que se prolonga el conflicto también aumenta. En un conflicto donde no hay participación de grupos terroristas, el tiempo promedio es de 17 años, por el contrario, un conflicto con participación de algún grupo terrorista tiene una duración promedio de 33 años.

A su vez el número de los países afectados por el terrorismo permanece alto, siendo estos 71, y a diferencia de las muertes, ha tenido una tendencia en aumentar (Institute for Economics & Peace, 2019). Esto se debe a que cada año, diferentes países son blanco de ataques terroristas, sumando países a la lista de afectados por el terrorismo, mientras que aquellos donde ya existieron ataques, siguen sufriendo incidentes terroristas. De acuerdo con el Índice Global de Terrorismo (Institute for Economics and Peace, 2019) las regiones del mundo más afectadas por el terrorismo en el 2019 fueron el Medio Oriente y África del Norte, África Subsahariana, y el Sudeste Asiático, siendo este último el más impactado. Estas regiones, además de ser los principales escenarios terroristas, son escenario de conflictos internos.

## 2. Terrorismo y crímenes internacionales

### 2.1. Crímenes de agresión

Otra de las razones que pueden explicar el abandono de la guerra por parte de los Estados es la penalización de esta, es decir del inicio injustificado de esta. Desde 2017, los Estados partes del Estatuto de Roma, decidieron activar el cuarto crimen bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, el de agresión (Coalition for the ICC, 2019), este crimen fue activado mediante las Enmiendas de Kampala. Estos crímenes son aquellos actos de agresión perpetrados por algún individuo en posición de poder sobre alguna fuerza militar estatal, en contra de otro Estado, que, según su gravedad y severidad, constituyen una violación a la Carta de las Naciones Unidas (The Global Campaign for Ratification and Implementation of Kampala Amendments on the Crime of Aggression, 2019). Así, los elementos que integran el concepto de crimen de agresión serían: 1) el elemento del liderazgo, 2) la existencia de un acto de agresión, y 3) la planificación, preparación, realización o iniciación del acto (Salmón, 2011).

De los elementos mencionados en el párrafo anterior, vale la pena destacar el de acto de agresión. Este acto es definido por las Enmiendas de Kampala (Resolución RC/Res.6 del 2010 de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma) como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas” (2010). Este mismo instrumento proscribe el “el envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados” (2010).



En este sentido, un reto que enfrentaría la comunidad internacional es la evasión de responsabilidades directas, es decir, aquellos cuyas intenciones sean perpetuar actos de agresión no lo harán bajo fuerzas militares regulares o bajo fuerzas irregulares propias, sino bajo el apoyo de unidades insurgentes del otro Estado. Así, con el fin de evitar la responsabilidad que eventualmente podrían enfrentar los líderes políticos o militares, estos podrán recurrir al apoyo de insurgencias y de grupos terroristas que permitan lograr el objetivo de agredir a otro Estado. Esto no solo evade la responsabilidad bajo el crimen de agresión a simple vista, también evita la presión internacional por dicha agresión. En este frente resulta incompleta la definición de crimen de agresión, pues recurrir a fuerzas insurgentes existentes para atacar a otro Estado tiene el alcance de constituir un acto de agresión. Así, casos como el apoyo de Rusia a separatistas ucranianos, o de Irán a grupos terroristas como Hizbulá, no encajarían en la definición de crimen de agresión. Aun así, no tendría sentido alguno ampliar la definición de acto de agresión para incluir el patrocinio o apoyo a grupos insurgentes o terroristas si los Estados se niegan a ratificar el Estatuto de Roma y las Enmiendas de Kampala. De los dos casos mencionados, el ruso y el iraní, y si bien ambos Estados firmaron el Estatuto de Roma, ninguno de los dos países lo han ratificado, mucho menos lo han hecho con las Enmiendas de Kampala (International Criminal Court, 2013).

De igual manera, si bien no todos los Estados han ratificado las Enmiendas de Kampala o el Estatuto de Roma en sí, la penalización de los crímenes de agresión constituye un avance en la búsqueda por evitar futuros conflictos interestatales. Esta penalización tiene una doble función, una de sancionar los actos de agresión, y otra de disuadir a líderes políticos y militares de iniciar algún tipo de conflicto; algo que aplica solo para los Estados que hayan ratificado las Enmiendas

de Kampala o el Estatuto de Roma. Hoy en día perduran diferentes conflictos entre Estados; sin embargo, la prohibición de la guerra y la penalización de actos de agresión son instrumentos que en un futuro podrán evitar estos conflictos. Es claro que seguirá siendo un reto para la comunidad internacional el hecho que solo 39 países hayan ratificado las Enmiendas de Kampala (United Nations Treaty Collection, 2019).

Ahora bien, la relación de los crímenes de agresión con el terrorismo puede llegar a ser confusa. En casos de terrorismo de Estado, un acto de terrorismo ejecutado por un Estado en contra de otro se podría considerar como crimen de agresión. Sin embargo, los demás casos de terrorismo, que podrían consistir en la mayor parte de actos de terrorismo, son ejecutados por actores insurgentes no estatales. Los líderes de estos grupos insurgentes no pueden ser considerados como individuos a los que se les puede atribuir responsabilidad por un crimen de agresión, pues un grupo insurgente no puede cometer un acto de agresión. La capacidad de los distintos grupos terroristas es variable; sin embargo, ninguno puede ser considerado un Estado con la capacidad de desplegar un acto de agresión (Muhammadin, 2015). Los casos de ataques de gran magnitud como los ataques del 11 de septiembre de 2001 no podrían considerarse actos de agresión provenientes de Al Qaeda, pues estos no están adscritos a un Estado. Sin embargo, hay casos donde los nexos entre grupos terroristas y ciertos Estados podrían considerarse actos de agresión.

Vale la pena entonces, recordar que existen grupos terroristas que son instrumentos de Estados que, con el fin de evitar tensiones directas, recurren a actores no estatales para cometer agresiones. Como se mencionó anteriormente, los crímenes de agresión bajo el paradigma de la Carta de las Naciones Unidas (1945) no cobijarían el uso de grupos terroristas para cometer actos

de agresión, pues el carácter clandestino de estos nexos no permite afiliar a los grupos terroristas con algún Estado. Aun así, hay grupos como Hizbulá que han servido como instrumentos de gobiernos como el iraní en su campaña de terror. A su vez, como se mencionó anteriormente, la protección, salvaguarda, y patrocinio de grupos terroristas perpetradores de atentados, por parte de un Estado, lo convertiría en cómplice de ese acto, permitiendo que esto sea considerado como un acto de agresión (Cassese, 2001). Bajo esta lógica, los atentados de los grupos terroristas que gozan del patrocinio de un Estado podrán ser considerados como actos de agresión de dicho Estado patrocinador.

## 2.2. Crímenes de lesa humanidad

Ahora bien, antes de analizar la relación entre el Derecho Internacional Humanitario y el terrorismo, vale la pena revisar la posibilidad de incluir a este en los crímenes de lesa humanidad. En este sentido, el establecimiento de la Corte Penal Internacional en 1998 significó que algunos de los crímenes más atroces que se han cometido, seguirían siendo investigados y procesados por un tribunal internacional. El hecho de que exista una corte a nivel internacional permite tener una mayor garantía de procesamiento y de no impunidad. Así, los delitos de competencia de la Corte son aquellos de trascendencia internacional (CPI, 2016) y que encuentran sus antecedentes en los tribunales establecidos previamente como los tribunales militares en Núremberg y Tokio. Uno de los crímenes de competencia de la Corte son los de lesa humanidad. El Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998, el cual entró en vigencia en 2002, define los crímenes de lesa humanidad como el:

“a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (...) u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar (...).” (1998).

Estos actos deben ser cometidos como parte de un ataque “generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (Corte Penal Internacional, 1998). Ahora bien, desde la entrada en funcionamiento de la Corte, la mayoría de los casos que esta ha conocido han sido sobre individuos que han participado en conflictos, tanto miembros de Estados como miembros de grupos insurgentes han sido procesados por la Corte (Corte Penal Internacional, 2020).

Ahora bien, considerando la definición de la Corte sobre crimen de lesa humanidad, esta podría ser compatible con la mayoría de las definiciones de terrorismo. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2018), los elementos básicos de los crímenes de lesa humanidad están relacionados con algunos actos de terrorismo. Si bien esta no es la opinión mayoritaria, autores como Galingging (2010) destacan la consideración de que

algunos actos de terrorismo cumplen con los requisitos para ser considerados un crimen de lesa humanidad. Es decir, esta postura sostiene que algunos ataques terroristas son sistemáticos, planeados con anterioridad, y tienen como objetivo la población civil (UNODC, 2018). La característica de ser sistemático se refiere a que un acto no puede aislado, deben existir varios ataques en contra de la población civil que tengan conexión entre sí. En cuanto al conocimiento del ataque, los autores de este deben saber que las víctimas de este serán parte de la población civil, no podrán ser bajas colaterales.

Ahora, algunos actos de terrorismo tienen el objetivo de causar el mayor daño posible a la población civil, sin discriminar la calidad de las víctimas y con el pleno conocimiento de sus autores sobre estos criterios. Existen quienes consideran que ataques que han sido planeados durante un largo período de tiempo y que, por su gravedad en cuanto al impacto político y número de bajas, podrán ser considerados como crímenes de lesa humanidad (UNODC, 2018). Sin embargo, la concepción frente a la necesidad de la ocurrencia de un conflicto armado para la existencia de un crimen contra la humanidad desconoce que los conflictos modernos incluyen la lucha contra el terrorismo. Aun así, hay ataques que podrán ser considerados como crímenes de lesa humanidad por lo planteado anteriormente, atentados como los del 11 de septiembre en 2001 en Estados Unidos, o la toma de un hotel en Mumbai en 2008, podrán cumplir los requisitos mencionados anteriormente.

Otra postura en relación a la inclusión de actos de terrorismo como crímenes de lesa humanidad la describe Roberta Arnold (2004). Arnold (2004) considera que el carácter de sistematizado de un crimen de lesa humanidad está vinculado a la existencia de una política. Es decir, debe haber una directriz de un gobierno, o una organización con poder efectivo, de cometer

ciertos actos en contra de alguna población civil. Es claro que no todas las organizaciones terroristas pueden ser consideradas como organizaciones con poder efectivo, algunas son células cuyos ataques no tienen mayor incidencia en la vida diaria de un Estado y que por su precaria capacidad no pueden cometer ataques mayores. Sin embargo, existen grupos terroristas con la capacidad de ejecutar ataques con grandes consecuencias, al igual de una multiplicidad de estos, un ejemplo de estas organizaciones podrá ser ISIL en el Medio Oriente o inclusive las FARC en Colombia. Al igual que UNODC (2018), Arnold (2004) estima que un ataque aislado no debe ser considerado como crimen de lesa humanidad, esto debido a la definición del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en este sentido, debe haber una conexidad entre varios ataques terroristas para cumplir este requisito. Así, los constantes ataques en el Medio Oriente en contra de la población cristiana, perpetrados por grupos extremistas, deberían ser considerados crímenes de lesa humanidad.

Si bien atentados como los del 11 de septiembre en 2001, o los diferentes ataques contra iglesias cristianas en Egipto y el Líbano pueden ser considerados como crímenes de lesa humanidad bajo la lógica anterior, la mayoría de los actos de terrorismo quedarían excluidos del conocimiento de la Corte Penal Internacional (Arnold, 2004). El factor determinante entonces para definir si otros atentados terroristas podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad es su característica de sistemáticos, es decir, que sea resultado de una política de un Estado o de una organización terrorista. Así, se deberá probar que el ataque fue planeado y ejecutado siguiendo una directriz, que este no es un acto aislado de retaliación o de un actor individual. Sobre esto, Arnold (2004) reflexiona sobre los atentados perpetrados por la Organización para Liberación de Palestina (OLP) entre 1970 y 1980, y los diferentes ataques suicidas en contra de blancos israelíes perpetrados en 2002 por Al Qaeda y sus células afines. El

primer grupo de ataques, los cuales consistían en asesinatos aleatorios, uso de explosivos, secuestro de aeronaves, entre otros, tuvieron cierta frecuencia en la década de 1970, lo que permite afirmar que estos eran ejecutados bajo la misma orden. Además, una de las políticas de la OLP era el ataque a blancos civiles israelíes con el objetivo de presionar al gobierno de Israel en asuntos políticos. En conclusión, el caso de la OLP debería ser considerado como un crimen de lesa humanidad. En cuanto al caso de Al Qaeda en 2002, hubo dos ataques en contra de un hotel israelí en Mombasa y de sitios turísticos en Bali, con un mes entre ellos (Arnold, 2004). Estos ataques, que, si bien a simple vista podrían ser actos aislados, fueron el resultado de una política de Al Qaeda en contra de la población occidental. Así, si se entiende que el tiempo que separa un ataque de otro es irrelevante, estos dos ataques podrán ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

En su definición de crimen de lesa humanidad, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, además de establecer los requisitos básicos que debe cumplir un acto para ser considerado en contra de la humanidad, enuncia una serie de conductas que podrán constituir este tipo de delitos. En relación al terrorismo, si bien cualquiera de estas conductas podrá ser cometida a través de un acto de terrorismo, el asesinato, la toma de rehenes, la tortura, el traslado forzoso de la población, los delitos sexuales, y la desaparición forzosa son los más comunes en el actuar terrorista. En el marco de un conflicto armado interno, será más fácil probar la comisión de dichos delitos por el grupo insurgente terrorista, mas en casos de terrorismo internacional, esto supone un reto. En los casos de asesinatos por actos de terrorismo, solo se deberá establecer la autoría de una organización terrorista para atribuirles la muerte de las víctimas (Proulx, 2003). En cuanto a las otras conductas, se deberá probar la existencia de la conducta, así como la participación del grupo terrorista en esta para poder atribuirle los resultados a este. En este sentido, es importante

entender que los grupos terroristas, inclusive fuera del marco de un conflicto armado, pueden ser perpetradores de crímenes de lesa humanidad, lo que extendería la responsabilidad de muchos de estos a un nivel internacional.

### 2.3. Crímenes de guerra

Otro crimen bajo competencia de la Corte Penal Internacional es el crimen de guerra. El Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998), afirma que los crímenes de guerra deben ser cometidos como un “plan o política o como parte de la comisión a gran escala” (Corte Penal Internacional, 1998). Es decir, los crímenes de guerra, al igual que los crímenes de lesa humanidad, no deben ser cometidos como un acto aislado, debe existir una estructura sistematizada para su comisión. A su vez, en su artículo 8.2, el Estatuto de Roma define los crímenes de guerra como:

- a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:  
(...)
- b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:  
(...)”. (1998)

Los Convenios de Ginebra, los cuales serán aplicados posteriormente en este texto, son los instrumentos de derecho internacional que regulan las actuaciones durante los conflictos, tanto



internacionales como internos. Ahora, sobre el punto a) citado, el Estatuto de la Corte hace alusión a actuaciones como el homicidio intencional, la tortura y los tratos inhumanos, la privación deliberada a un prisionero de guerra u otra persona protegida, como la población civil, a un juicio legítimo, o la toma de rehenes. En cuanto al punto b), se mencionan actos como ataques contra la población o la infraestructura civil, ataques contra misiones de paz o de misiones conformadas de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, lanzar ataques que se sabe ocasionaran daños duraderos al medio ambiente, los saqueos, el uso de armas envenenadas, asesinar “a traición”, asesinar al adversario que ha depuesto las armas, entre otras conductas. Así, el Estatuto de 1998, de acuerdo a los Convenios de Ginebra de 1949, prohíbe y hace responsables a aquellos que cometen ciertos actos, esto con el objetivo de hacer la guerra más humana.

Ahora bien, al tratarse de una violación a las normas que regulan los conflictos, se puede entender que los crímenes de guerra solo pueden ser cometidos por parte combatientes en un conflicto, es decir, podrán ser cometidos por las fuerzas de Estados que se enfrentan entre sí, o por grupos armados no estatales que participan como beligerantes en un conflicto armado no internacional (UNODC, 2018). En este sentido, no cualquier acto de terrorismo podrá ser considerado como crimen de guerra bajo el criterio de la Corte Penal Internacional, esto debido a la necesidad de sistematicidad y su tamaño, y al requisito que el grupo que lo cometa debe ser considerado como combatiente o beligerante en el conflicto. Este sentido, para que un grupo terrorista sea considerado como beligerante o combatiente, deberá tener capacidad de operación similar a la de las fuerzas armadas de un Estado, es decir, deberá tener la capacidad para enfrentarse a un Estado (UNODC, 2018). De esta manera, serán pocos los grupos terroristas que son considerados como beligerantes, ejemplos de esta categoría de grupo terrorista podrán ser las FARC en sus inicios, o ISIL, el cual llegó a tener la estructura y capacidad de un Estado. En

cuanto a otros grupos terroristas como Al-Qaeda o Al-Shabab, no es posible afirmar que son posibles responsables de crímenes de guerra, pues no son considerados partes de un conflicto. A su vez, los actos que podrían ser objeto de responsabilidad por un crimen de guerra deben ser cometidos como política “institucional”, los secuestros indiscriminados de civiles, militares, y policías por parte de las FARC<sup>2</sup> o la ejecución de supuestos simpatizantes de las guerrillas comunistas por parte de los grupos paramilitares en Colombia<sup>3</sup>, que podrían ser encajados a su vez como crímenes de lesa humanidad, podrán ser catalogados como un crimen de guerra, ya que estos fueron cometidos bajo una directriz de las jerarquías más altas de estos grupos. En el mismo sentido, los actos de terrorismo deben ser masivos, es decir, tener un real impacto, así, actos menores, que si bien podrían ser catalogados como crímenes de guerra si fuesen cometidos en repetidas ocasiones, no ameritan el conocimiento de la Corte Penal Internacional. En el mismo sentido, actos aislados de terrorismo no son susceptibles de ser catalogados como crímenes de guerra. Ahora bien, vale la pena destacar nuevamente que, al afirmar que un grupo terrorista, o sus miembros, pueden ser responsables de cometer un crimen de guerra, los estaría dotando de la calidad de combatiente, algo que en muchos casos no resulta claro del todo.

De acuerdo a la UNODC (2018), uno de los principales elementos para la inclusión del terrorismo como crimen de guerra es el de infligir terror a la población civil, o de cometer actos que resulten en el terror en la población civil. En este punto es importante destacar que uno de los

---

<sup>2</sup> De acuerdo a Cifras y Conceptos (2010) el número de secuestros llevados a cabo por las FARC entre 1970 y 2010 fue de 9.447.

<sup>3</sup> De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica (2012) el número de asesinatos selectivos llevados a cabo por grupos paramilitares entre 1985 y 2012 fue de 8.903.

principales objetivos de las leyes que regulan los conflictos es la protección de la población civil y su distinción de la población combatiente. Teniendo esto en mente, los actos de terrorismo, de manera predominante, buscan causar terror y zozobra entre la población civil, como mecanismo de poner en jaque a la sociedad, durante el desarrollo de un conflicto armado o en una situación de terrorismo por fuera de un conflicto armado. De esto se puede concluir entonces que el factor determinante en cuanto a los actos de terrorismo y los crímenes de guerra es la existencia de un conflicto armado no internacional, ya que, en los casos de un conflicto armado internacional, cualquier acto de terrorismo perpetrado por un Estado, deberá ser considerado como un crimen de guerra bajo a lógica del Estatuto de Roma.

### 3. La búsqueda por definir el terrorismo

Ahora bien, en cuanto al terrorismo, su definición y su tratamiento, no han tenido un desarrollo académico homogéneo o pacífico a lo largo de la historia, así, este no tiene una definición única y ha sido utilizado de diversas maneras por diferentes actores. Así, Ben Saul (2006), destaca la influencia que tiene la política sobre el concepto de terrorismo. A lo largo de la historia, el terrorismo ha sido empleado por diferentes actores con fines políticos. En el mismo sentido, se ha usado el término terrorista para estos fines, haciendo un uso conveniente e irresponsable en relación al derecho internacional. Así, los primeros usos de la palabra terrorista se utilizaron en el Siglo XVIII para describir acciones estatales, como el “Régimen del Terror” o el “Terror Rojo”, durante el gobierno jacobino después de la Revolución Francesa. Desde entonces el terrorismo estuvo ligado al actuar de los Estados, no a grupos insurgencias o grupos no estatales. El terrorismo se utilizó como un mecanismo de control social sobre las poblaciones, así como un instrumento en las guerras para lograr una ventaja psicológica sobre el enemigo y en especial sobre su población. Así, Bismarck utilizó el ejército en Prusia para controlar a la población, los nazis y en general los fascistas y comunistas recurrieron a métodos terroristas contra sus propias poblaciones, ambos lados durante la Segunda Guerra Mundial recurrieron a bombardeos sobre blancos civiles para causar terror (Saul, 2004). Es claro que hubo casos de terrorismo donde grupos no estatales fueron los autores, como el asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Austria, o el asesinato del Rey Alejandro I de Yugoslavia; sin embargo, era más común el empleo del término terrorista en contra de acciones estatales.

Fue entonces después de la Segunda Guerra Mundial, bajo la dinámica de la Guerra Fría, que el terrorismo cobró la forma en la que se conoce hoy en día. Las intervenciones de las

grandes potencias en países en desarrollo, así como el patrocinio de grupos comunistas y anticomunistas por parte de la Unión Soviética y Estados Unidos respectivamente, estimuló el constante uso del término terrorista (Saul, 2004). Durante la Guerra Fría, existió una tendencia a abstenerse de usar el término terrorista para describir la violencia anticolonialista, en ese sentido no existía un consenso ni siquiera en Occidente sobre el carácter de terrorista de los ataques contra las autoridades coloniales británicas en Kenia, o los ataques contra los franceses en Argelia (Saul, 2004). En los casos de colonialismo, los ataques terroristas normalmente resultaban efectivos, pues obtuvieron su objetivo de lograr la independencia. Por otra parte, otros grupos como el Bloque Palestino jugó un papel sin éxito, convirtiendo los grupos que heredaron su causa en terroristas para algunos, y en beligerantes para otros. A su vez, el pretexto del terrorismo, el cual no ha tenido una definición clara, se usó durante la Guerra Fría para promover invasiones, tal como el caso de la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética en 1979 (Saul, 2004). Bajo esta misma lógica, se siguen promoviendo intervenciones militares el día de hoy.

Con el colapso de la Unión Soviética en la década de 1990, y el fin de la Guerra Fría, el terrorismo, y por ende el uso del término terrorismo, empezó a ser empleado por grupos fundamentalistas y por grupos étnicos sectarios (Saul, 2004). Esta afirmación no quiere decir que el terrorismo heredado de la Guerra Fría desapareciera, por el contrario, grupos comunistas y contrainsurgentes siguieron actuando y cometiendo actos terroristas, algunos hasta el día de hoy. Sin embargo, el terrorismo islámico cobró una mayor relevancia con grupos como Al Qaeda, el cual recurrió a tácticas no convencionales como secuestros para el intercambio de prisioneros, o bombardeos a objetivos civiles. Por su parte, los asesinatos selectivos contra figuras públicas por parte de grupos terroristas continuaron en países como Ruanda y Burundi (Saul, 2004), donde el

derribamiento de un avión donde viajaban los líderes de estos dos países ocasionó el peor genocidio que ha visto el mundo desde el Holocausto.

Fue después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 que la palabra terrorista se comenzó a utilizar como para describir cualquier acto en contra de la seguridad internacional. No cabe duda de que uno de los riesgos más grandes que enfrenta actualmente la seguridad mundial es el terrorismo, pero la palabra y la amenaza terrorista se volvió el pretexto y la justificación para una serie de acciones que, para algunos, han desbordado los poderes de los Estados y han terminado en violaciones a los Derechos Humanos (Von Schorlemer, 2003). Los ataques del 11 de septiembre también provocaron que grupos terroristas aislados fueran homogeneizados en una misma masa bajo la “guerra al terror” del presidente George W. Bush, y no cabe duda de que han existido y siguen existiendo nexos entre organizaciones terroristas como Al Qaeda y Al Shabab (Felter, Masters & Sergie, 2020); sin embargo, las características de estos grupos resultan en algunos casos diferentes.

Vale entonces la pena afirmar que es imposible negar la incidencia que tuvieron los ataques del 11 de septiembre de 2001 en la búsqueda por una definición del terrorismo. Estos ataques, además de demostrar el riesgo para la seguridad internacional que podía representar el terrorismo, hicieron que fuera aún más importante la definición de este término. Además, en la resolución del Consejo de Seguridad 1368 del 12 de septiembre de 2001, las Naciones Unidas instaron a todos los Estados a tomar medidas para combatir y eliminar el terrorismo (Consejo de Seguridad, 2001).

Ahora bien, aunque el término terrorista se utiliza en la política internacional bajo distintos significados, siempre tiene algo constante, este se usa de manera peyorativa para atacar y descalificar al enemigo. Saul (2004) explica que más allá del significado que tenga o se le dé a la palabra, esta siempre tendrá un significado negativo y deshumanizante, los grupos terroristas se convierten en entes contrarios a la humanidad, cuyos objetivos se traducen en sembrar miedo. Así, Saul (2004) expone que, el término está cargado ideológica y políticamente; peyorativo; implica juicio moral, social y de valor; y es "resbaladizo y muy abusado" (p. 3). Es por esto por lo que no existe una aceptación entre la comunidad internacional de la lista de grupos terroristas, varios Estados y organizaciones se han encargado de designar a ciertos grupos armados como terroristas; sin embargo, grupos considerados como terroristas por un Estado, son considerados beligerantes o legales por otro, inclusive son patrocinados. Un ejemplo de esto es Hizbulá, el cual es considerado por países como Estados Unidos como terrorista por sus ataques en el Líbano y el Medio Oriente (Rollins, 2019), pero que es patrocinado y observado como un actor armado legítimo por Irán (DeVore, 2012). Para Saul (2004), el uso del término terrorista, y su ausencia de una definición única, permite el uso oportunista de la palabra. Este uso oportunista del término implica a su vez que toda acción armada por un grupo no estatal pierda total legitimidad, pues en la mayoría de los casos será enmarcada como un actuar terrorista.

En el mismo sentido, la palabra terrorista se utiliza para describir diferentes tipos de asuntos negativos, en este caso no solo en la política, sino en los medios de comunicación. El término se emplea para referirse al “[...] “terror de la balanza nuclear, violaciones por “terroristas sexuales”; y a la Inquisición Española” (Saul, 2004, p. 3), asuntos que, si bien pueden ser objeto de reproche, no podrían compararse con atentados terroristas como bombas y masacres. A su vez, el abuso de la palabra terrorista llega al punto de usarla para describir asuntos que no son

reprochables en ningún sentido, como a los refugiados, o incluso políticos se acusan entre sí de terroristas (Saul, 2004). Por otra parte, el término se ha dejado de aplicar en situaciones que podrían ser catalogadas como terroristas, esto depende de la conveniencia política de esto. Existen casos que, por las dinámicas de la política internacional, se ha rehusado a usar el término “terrorista” para describir algún acto.

Saul (2004) afirma que el término terrorista recoge en una palabra los fenómenos de violencia política que todas las sociedades rechazan. Es por esta razón que el término es tan utilizado, ya que satisface en mayor medida la necesidad de la gente de obtener justicia, ya que al penalizar una conducta como un acto terrorista, y no como un delito común, se le está agregando un desvalor, es decir, se hace un mayor reproche. Ahora bien, para cuestiones jurídicas esto presenta un problema ya que los sistemas jurídicos y sus operadores deberían velar por evitar conductas que pongan en entredicho la presunta inocencia de algún procesado, o que de alguna forma se politice la aplicación de justicia. Es posible que, debido a esto, aunque no exista una definición clara a nivel internacional, a nivel interno sí existen definiciones dentro de los catálogos de delitos. Por esto para Saul (2004) una definición clara de terrorismo podría conllevar un proceso penal más justo.

Antes de revisar las definiciones de terrorismo aportadas por algunos autores y por ciertas organizaciones internacionales, es importante analizar lo planteado por los profesores australianos Ben Golder y George Williams (2004) en relación a los problemas de definir el terrorismo. Golder y Williams (2004) afirman que hay dos maneras de definir el terrorismo, una general y una específica. Ambos métodos de definición presentan retos y oportunidades para la comunidad internacional en términos cooperación en la lucha contra el terrorismo. El método



especifico de definición del terrorismo se enfoca en identificar ciertas conductas llevadas a cabo por los grupos terroristas, tal como secuestro de aeronaves o uso de explosivos, sin necesidad de crear una definición jurídica normativa global del término que abarque la generalidad de estos actos. Ahora bien, el método específico de definir el terrorismo podría desconocer el reconocimiento de ciertos principios generales comunes al actuar terrorista, los cuales permiten un análisis homogéneo de este. En el mismo sentido, referirse a actos de terrorismo particulares no podría dar una definición de lo que se considera como terrorismo, solo señalaría algunos actos considerados como terroristas, dejando otros actos que en un futuro podrán ser utilizados por estos grupos. Sin embargo, una definición específica de los actos de terrorismo permite una mejor respuesta y regulación frente a los mismos. Esto también permite articular medidas más efectivas frente a ciertos actos o amenazas terroristas.

En consecuencia, el método general busca crear una definición que pueda cobijar todo el actuar de los grupos terroristas, que incluye los aspectos generales del actuar de los mencionados grupos. Esta forma de definir al terrorismo tiene el objetivo de encontrar patrones entre los grupos terroristas que permita crear una definición única. Criterios como el blanco que se busca atacar o la intención de los grupos terroristas funcionan como denominadores comunes.

Normalmente, el blanco de los terroristas es la población civil, atacada de manera aleatoria, mientras que la intención de estos es doblegar la autoridad de un Estado o de una organización internacional (Golder & Williams, 2004). Por otro lado, la realidad política no permite crear una definición que permita enmarcar como terroristas todos los grupos que llevan a cabo ataques en contra de la población o que quieran poner en jaque a un Estado, esta realidad está permeada por las dinámicas internacionales en las que los Estados patrocinan a grupos que otros consideran terroristas. A su vez, los grupos terroristas tienen diversas características que dificultan su

clasificación bajo una sola definición. Sin embargo, algunos autores han buscado definir al terrorismo bajo una única definición.

Así, dentro de la doctrina y de la academia internacional, se ha buscado darle un significado al terrorismo. Yoram Dinstein (2014) destaca la importancia de encontrar una definición al terrorismo; sin embargo, afirma que, al menos en tratados internacionales vigentes, esto no ha sido posible. Así, Dinstein destaca que el único tratado que de alguna manera ha ofrecido una definición cercana ha sido el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Esta convención enuncia una serie de tratados internacionales correspondientes a actos particulares de terrorismo, y en su artículo 2 (1) (b) se refiere de forma residual a:

Cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Esta definición es la primera en vincular a los Estados. De ella se podría concluir que tanto actores estatales, como no estatales, pueden recurrir a actos terroristas. Si bien la definición del Convenio de 1999 es un acercamiento para definir el terrorismo, esta define exclusivamente los actos que son considerados terroristas.

En el mismo sentido, Dinstein (2014) hace énfasis en una triple distinción frente a otros actos de violencia: (a) las víctimas, (b) el objetivo, y (c) el resultado. Para esto cita a Guillaume (2004), quien a su vez resalta que, en el caso de estos actos, las víctimas son seleccionadas de manera aleatoria o por su sentido simbólico, opuesto al caso de las víctimas que son combatientes. En cuanto al objetivo de los actos terroristas, es la propagación de terror entre las víctimas o entre determinada población. Por último, en relación al resultado que se busca obtener es el de someter a determinada autoridad, lograr más concesiones a su favor, o considerar para sí una posición favorable. Sin embargo, de este planteamiento deducir que, al igual que la definición que proporciona el Convenio de 1999, se refiere a actos terroristas, a una determinada categorización de actos de violencia en el marco de un conflicto o por fuera de este.

Por su parte, Marcello Di Filippo (2014), ha destacado que la definición del término terrorismo y la designación de un grupo armado como terrorista, responde a cuestiones políticas, no a cuestiones jurídicas. En consecuencia, dotar al terrorismo de un solo significado que pueda recoger todas definiciones supone no solo una labor compleja, sino un nivel de cooperación internacional, que en esta coyuntura es inexistente. Si bien es imposible separar el derecho internacional de los factores políticos, el poco consenso que existe frente a la definición del terrorismo ha significado que la lucha contra este, y la designación de grupos como terroristas, sea en diversos casos unilateral. Es evidente que la lucha contra grupos terroristas es una donde el multilateralismo es mínimo, y donde mientras algunos Estados luchan contra algunos grupos terroristas, otros los patrocinan. En el mismo sentido, Di Filippo (2014) indaga la posibilidad de crear el mencionado consenso, que permita construir una definición de terrorismo que funcione para la totalidad de la comunidad internacional. Di Filippo (2014) afirma que para esto, como

para la mayoría de cuestiones de derecho internacional, existe la necesidad de crear un concepto marco lo suficientemente completo que no permita la existencia de otras definiciones.

Con este fin resalta la cuestión sobre la tipificación del terrorismo como un delito autónomo, y así, los fines de quienes ejecutan estos actos y el modo de operar. En este sentido, Di Filippo (2014) afirma que quienes ejecutan actos terroristas, y quienes pueden ser referidos como terroristas, tienen fines políticos, operan como actores políticos frustrados bajo el argumento de que se vieron obligados a recurrir a la violencia. Por su parte, este autor diferencia los grupos terroristas del crimen organizado en cuanto los grupos de crimen organizado tienen fines económicos, en la mayoría de los casos, como el tráfico de sustancias o de especies (2014). Así, el uso de la violencia por parte de los terroristas buscará doblegar a alguna autoridad estatal o a una organización internacional para imponer su voluntad política, o para obligar a dicha autoridad a ceder. Casos como el de las FARC en sus inicios, Hamás en Israel, o el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), demuestran que el uso de la violencia a través de actos terroristas ha tenido fines políticos, y que cuya efectividad dependerá de la capacidad de los Estados de lidiar con estos ataques. A esta característica se podría sumar, además de fines políticos, fines ideológicos en general, lo cual abarcaría a grupos terroristas islámicos, otros grupos religiosos, y los grupos de extrema derecha que se encuentran resurgiendo en Europa y América (Vision of Humanity, 2018). Así, el fin último de los terroristas es la erradicación de las razones por las que emplearon la violencia sobre los mecanismos pacíficos.

El segundo factor determinante para definir un acto como terrorismo es el *modus operandi* de sus actores, la manera en la que se ejecuta el atentado (Di Filippo, 2014). Así, una característica de esta manera de operar es el empleo de la violencia para crear terror y zozobra

entre la población civil y las autoridades, la cual ha sido característico del terrorismo a lo largo de la historia. Normalmente los blancos de los ataques terroristas son objetivos simbólicos y de alto significado para la población, lugares de alto flujo de civiles, como aeropuertos, monumentos, centros comerciales, y edificios estatales fuera de las zonas de conflicto. Esto resulta contrario a los grupos de crimen organizado, los cuales atacan lo que supone un obstáculo para sus intereses, por ejemplo, grupos policiales antinarcóticos, informantes de la policía, entre otros. Sin embargo, vale aclarar que, si bien existe un consenso sobre el nexo entre terrorismo y violencia, no existe un consenso frente a la designación de actos de violencia como actos de terrorismo. No todos los actos de violencia que creen terror entre la población podrán ser catalogados como terrorismo, esto supone otro reto en la creación de un concepto unificado de terrorismo (Di Filippo, 2014).

Así, si bien estos dos factores son importantes para la construcción del concepto de terrorismo, solos no permiten lograr dicho objetivo, es necesario la formulación de otros factores para lograrlo. Por esto, Di Filippo (2014) propone que otro factor importante para superar esto es el análisis que se debe hacer frente a la aceptación del acto terrorista entre los Estados y la violación de ciertos principios del derecho internacional. Como se mencionó en el párrafo anterior, existen delitos y actos de violencia que no constituyen actos de terrorismo; sin embargo, estos actos no terroristas no violan, en rasgos generales, los principios y las normas de derecho internacional. A simple vista los actos terroristas, al igual que un homicidio común, violan los principios de la dignidad humana, integridad física, y de la vida; sin embargo, no es posible negar que la selección de las víctimas juega un rol clave en el contexto del derecho internacional. En este sentido, los actos de asesinar civiles de manera aleatoria tienen mayor impacto entre la población y son catalogados como actos terroristas, a diferencia de los asesinatos de líderes políticos, agentes estatales, entre otros. Esto es el resultado del razonamiento que afectar a la

población civil en sus asuntos diarios, con actos que atenten contra su vida y su estilo de vida, genera una mayor inseguridad entre esta y tiene un mayor impacto psicológico (Di Filippo, 2014). Este razonamiento, realizado por grupos terroristas, les permite poner más presión sobre los Estados. Es importante aclarar que los actos terroristas no se limitan a actuaciones que atenten contra la vida, estos pueden ser actos que pongan en entredicho el estilo de vida de la población civil, tal como la difusión de información, el bloqueo de vías, el vandalismo de estructuras o lugares públicos, entre otros.

Otro factor que diferencia los actos de terrorismo es la existencia de un grupo organizado que planea y ejecuta dichos actos. Di Filippo (2014) expone que la existencia de un grupo permite considerar que un algún acto terrorista puede repetirse por la existencia de diversos miembros. En el mismo sentido, la financiación de las organizaciones terroristas, que puede ser el patrocinio de un Estado o puede constituir en sí actos criminales, tales como la extorsión y el secuestro, demuestra su capacidad económica, lo que se traduce en operatividad. Así, la existencia de una organización, que cuenta con un financiamiento autónomo es sinónimo de una capacidad de actuación mayor, tanto en magnitud de los ataques y en el número y recurrencia de estos, como en la cantidad de territorio en la que puede operar un grupo terrorista. De esto se desprende que los actos de grupos terroristas crean mayor pánico y terror que actos aislados. Es así como surge la necesidad de proteger valores de la población de actos que busquen crear terror y pánico con fines ideológicos, y ejecutados por grupos organizados (Di Filippo, 2014). Otros valores por proteger deben incluir el medio ambiente, la infraestructura económica, y las comunicaciones, estos además de los personales.

A su vez, al tener estos factores en cuenta para construir un concepto marco, se debe considerar que un concepto demasiado amplio de terrorismo podría, de manera equivocada, abarcar asuntos sin relación al terrorismo. Esto podría suponer un problema para la aceptación por parte de los Estados en adoptar dicha definición.

Por su parte, Müllerson (2015), plantea que la diferenciación entre un ataque convencional por parte de un Estado o de un grupo beligerante, de un ataque de un grupo terrorista tiene tres elementos, los cuales funcionan a su vez para definir actuaciones y grupos terroristas. El primer elemento es sobre los autores del ataque, aunque pueden estar patrocinados por Estados, los grupos terroristas no tienen, en su mayoría, afiliación estatal, no son agencias de un Estado que operan en su nombre. Un segundo elemento es la clandestinidad de los grupos terroristas, los cuales normalmente recurren al uso de alias, la emisión de comunicados desde el anonimato, y al empleo de bases de operaciones clandestinas, lo cual no permite una identificación plena de estos. Vale la pena aclarar que existen organizaciones estatales, tal como los Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, que han sido designados como organizaciones terroristas, en este caso por Estados Unidos, Arabia Saudita, Canadá, y Bahrein (Harding, 2020). Por último, el tercer elemento para identificar un ataque terrorista es el de los métodos utilizados, estos son normalmente una violación al Derecho Internacional Humanitario, en especial porque sus principales víctimas son civiles, no actores de un conflicto. Estas tres características resultan suficientes para diferenciar un ataque terrorista de un ataque convencional, o para definir un ataque terrorista, y a su vez para invocar la legítima defensa por parte de los Estados en contra de los grupos terroristas.

A su vez, Mathew Manning (2015) concluye que no existe una definición sólida del término terrorista, ni en Estados Unidos, ni a nivel internacional en las Naciones Unidas. Sin embargo, es posible rescatar algunos factores comunes que están presentes en diferentes definiciones brindadas tanto por autores, como por instrumentos internacionales y piezas de legislación estadounidense. El primero de estos factores comunes es la existencia de un daño hacia un individuo, principalmente daños físicos graves, y hacia la infraestructura. La exigencia de un daño aparece en una serie de convenciones internacionales como la Convención de Terrorismo Nuclear, el Protocolo de Montreal de 1988, entre otros. Ahora bien, estos daños a la integridad física de los individuos, no incluye, en varios instrumentos, casos como el secuestro (Manning, 2015). Otro factor común es la penalización de dicho daño, es decir, el daño debe ser uno antijurídico, el cual el sujeto objeto de este no tenga el deber de recibir o resistir. Ahora, un factor que se destaca de algunas de las convenciones internacionales contra el terrorismo, no en todas, es la necesidad de coerción o intimidación. El terrorismo tiene su base en la creación del miedo entre la población, al igual que Manning (2015) varios autores consideran que el objetivo del terrorismo es la imposición de sus voluntades políticas a través de actos que crean terror. En este sentido, los actos que crean terror no siempre se traducen en actos que generan daños, estos pueden ser amenazas de atentados o campañas en los medios de comunicación, algo que rompe con el primer factor común mencionado. Manning (2015) también argumenta que, de acuerdo con la regulación internacional vigente, solo los civiles no combatientes pueden ser objeto de atentados terroristas. Esto ha creado polémica pues existen combatientes como contratistas o técnicos, cuyo rol en un conflicto no puede ser comparado con aquel de las fuerzas militares, aun así, de acuerdo con la mayoría de los instrumentos internacionales, estos no serían víctimas del terrorismo.



Ahora bien, las convenciones internacionales de terrorismo dan una alta importancia a la carga subjetiva de los ataques terroristas (Manning, 2015). Es claro que los actores terroristas deben buscar algún fin político de doblegar al Estado o a alguna organización internacional con sus ataques, un fin común a diversos autores e instrumentos legales. Igualmente, los actores terroristas deben buscar el resultado que ocasiona sus ataques, es decir lo que realmente ocurre después de un atentado terrorista. Esto se puede traducir en que los terroristas deben tener la intención de a) lograr el objetivo político que buscan imponer, b) perpetuar el ataque como tal, y c) instaurar el miedo o la intimidación que ocasiona el ataque (Manning, 2015). En cuanto a la naturaleza de los actores terroristas, Manning (2015) afirma que estos no pueden ser Estados, es decir, deben ser grupos no estatales. A simple vista esta afirmación desconocería el terrorismo de Estado; sin embargo, si un Estado recurre a métodos no convencionales en el marco de un conflicto, los responsables de dichos actos podrán ser objeto de crímenes de guerra. En caso de que dichos actos sean perpetrados por un Estado en el marco de una situación interna, los responsables igualmente serán objeto de penalización por violaciones a los derechos humanos.

Manning (2015), termina por ofrecer una definición de terrorismo, la cual incluye los factores mencionados anteriormente. En consecuencia, su definición de terrorismo incluye la existencia de un daño, o el asesinato, a un individuo no combatiente, o a parte de la infraestructura pública que cause un perjuicio económico, y cuyo propósito sea causar coerción o intimidación. Bajo el mismo análisis, los actos deben ser perpetrados por un actor no estatal cuya naturaleza sea ilegal. Igualmente, las consecuencias ocasionadas por el acto terrorista deben ser buscadas y previstas por sus autores, de lo contrario no existiría la intención de intimidar. Así mismo, las consecuencias del ataque terrorista deben tener repercusiones exclusivas para un

Estado o a nivel internacional, algo que desconocen algunas convenciones, las cuales afirman que, para ser considerado como terrorismo, un acto debe tener impacto en más de un Estado.

Como se dijo anteriormente, a nivel nacional, los Estados buscan definir el terrorismo dentro de sus sistemas penales y lo han categorizado como un delito autónomo. Debido al gran número de Estados, resulta impráctico analizar la definición que cada Estado le da al terrorismo. Sin embargo, los diferentes órganos regionales han buscado dar una respuesta legal al fenómeno del terrorismo y a su falta de definición.

La Unión Europea fue creada en respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y reunió a antiguos enemigos en una organización. Esta organización busca fomentar la cooperación entre sus miembros y a su vez, armonizar las regulaciones existentes, así como crear regulaciones únicas que rijan a toda la Unión. El primer instrumento de la Unión Europea, y de sus organizaciones predecesoras, que buscó armonizar la regulación del terrorismo fue la Convención Europea para la Supresión del Terrorismo, firmada en 1977. En rasgos generales, la Convención de 1977 buscó crear una lista de diferentes delitos constitutivos de actos de terrorismo, algunos de ellos existían en convenciones internacionales existentes (Murphy, 2014). Ahora bien, la Convención incluyó aquellas actuaciones relacionadas a terrorismo en la aviación, a la seguridad de agentes diplomáticos, al uso de explosivos, y al secuestro; todo esto haciendo alusión a las convenciones existentes sobre estos asuntos. Así, la Convención fue un instrumento predominantemente procesal, en cuanto este no dio una definición del terrorismo, sino que reguló asuntos como la extradición de terroristas entre Estados de la Unión, utilizando las convenciones existentes (Dumitriu, 2004). Es claro que la segunda mitad del Siglo XX vio la existencia de grupos terroristas en países de Europa, lo que obligaba a la mayoría de los Estados a tener

regulaciones autónomas sobre este (Murphy, 2014). Casos como el del IRA y el Reino Unido, ETA y España, o las Brigadas Rojas en Italia hicieron que estos países desarrollaran su propia legislación para tratar el terrorismo, inclusive después de la Convención de 1977.

Ahora bien, la Unión Europea tuvo instrumentos posteriores a la Convención de 1977 referentes al terrorismo; sin embargo, el instrumento que buscó armonizar como tal la definición de terrorismo entre los Estados miembros fue la Decisión Marco del Consejo del 13 de junio de 2002 Sobre la Lucha Contra el Terrorismo. Antes de esta Decisión del Consejo Europeo, seis de los 15 miembros de la Unión penalizaban los actos de terrorismo como delitos comunes, el resto tenían un proceso y penalización diferente. En este sentido, el objetivo del Consejo Europeo fue proveer a los Estados miembros de una definición amplia de los actos que constituyen terrorismo. Ahora bien, la Decisión del 2002 no contiene una definición como tal de actos de terrorismo, esta contiene una lista de delitos referentes a actos de terrorismo, organizaciones terroristas, sujetos cómplices y colaboradores, entre otros. Así, esta decisión ha permitido a los Estados gozar de cierta libertad en cuanto a la regulación interna del terrorismo siguiendo los parámetros brindados por la Decisión del 2002.

En este sentido, la Decisión del 2002 definió que, para que un acto sea considerado como terrorista debe tener cierta carga subjetiva. Al igual que otros autores, la Unión Europea se enfoca en la intención que tiene el autor al cometer algún acto. De acuerdo al Consejo Europeo (2002) el actor debe cometer el acto con la intención de:

— intimidar gravemente a una población,

- obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo,
- o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional; (...). (p. 2).

Es así como la Unión Europea creó un marco en el cual todos sus Estados miembros deben legislar. Ahora, al igual que con la Convención de 1977, los Estados más afectados por el terrorismo han adoptado regulaciones más contundentes frente al terrorismo y que abarcan otros casos que los expuestos por la Decisión del 2002. Esto último frente al reciente aumento de ataques terroristas en Europa.

Por su lado, el bloque de las Américas también se ha pronunciado sobre la materia. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha adoptado una serie de instrumentos relacionado al terrorismo que, según Mirko Sossai (2014), pueden ser divididos en tres fases. En este sentido, la primera fase consiste en la adopción de la Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo, firmada en Washington D.C. en 1971. Esta convención fue la respuesta a secuestros y asesinatos de diplomáticos, los cuales se habían vuelto comunes entre el actuar de los grupos revolucionarios. Por esto, la Asamblea General de la OEA, hizo especial énfasis en los mencionados delitos, sin dar una definición de acto de terrorismo como tal. En el artículo I de la referida convención, la Asamblea General de la OEA (1971) estableció:

Los Estados contratantes se obligan a cooperar entre sí, tomando todas las medidas que consideren eficaces de acuerdo con sus respectivas legislaciones y especialmente las que

se establecen en esta Convención, para prevenir y sancionar **los actos de terrorismo y en especial el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes el Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al derecho internacional**, así como la extorsión conexa con estos delitos. (p. 1) (Negrilla fuera del texto).

A través de esta convención, la OEA se limitó a establecer los actos de terrorismo que debían tener especial tratamiento por los Estados miembros, mas no brindó una definición de qué es un acto de terrorismo. Vale la pena aclarar que, a diferencia de las decisiones tomadas por la Unión Europea, las decisiones de la Asamblea General de la OEA no son vinculantes. Ahora bien, aunque no hubo una definición del terrorismo, si quedó claro plasmado que, los delitos cometidos en contra del personal diplomático extranjero serían considerados actos de terrorismo. La segunda fase de la respuesta de la OEA al terrorismo fue la creación del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) en 1994 (Sossai, 2014). Si bien esta decisión no ofreció de ninguna manera una definición del terrorismo, sí permitió un mayor desarrollo de políticas tanto de la OEA como de los Estados miembros en relación a la cooperación interestatal frente al terrorismo.

Ahora bien, la tercera fase referida por Sossai (2014) se da con la firma del instrumento de mayor relevancia en la OEA respecto al terrorismo, la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002. La Convención del 2002, la cual tuvo cierta influencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001, tampoco dio una definición concreta de acto terrorista o de terrorismo. En este caso, y después de varias negociaciones, la Asamblea General de la OEA conformó una lista, donde recopiló 10 “instrumentos internacionales aplicables” (OEA, 2002, p. 1), de los cuales declaró que la palabra “delito” sería entendida de acuerdo a estos. Estos instrumentos son

acuerdos internacionales previamente suscritos sobre actos de terrorismo específicos, por ejemplo, el Convenio Internacional para la Represión de Atentados Terroristas Cometidos con Bombas de 1997 o el Convenio sobre la Protección Física de e los Materiales Nucleares. Así, la Convención de 2002 recogió las definiciones de cada instrumento sobre los actos de terrorismo contemplados en cada uno de estos. En este sentido, la OEA no tiene ninguna resolución, convenio, o instrumento que brinde una definición concreta de terrorismo.

Otro bloque regional que ha tratado el tema del terrorismo y que ha buscado una definición ha sido el africano. En la asamblea de la organización que precedió a la Unión Africana, la Organización para la Unidad Africana, de 1999, los miembros de esta organización adoptaron la Convención sobre la Prevención y el Combate del Terrorismo. Esta convención fijó los parámetros de lucha contra el terrorismo que debían ser adoptados por los Estados miembros de la organización, estos se enfocaban en el reproche del terrorismo y la implementación de medidas de cooperación que facilitarían la penalización de actos de terrorismo. La Organización para la Unidad Africana afirmó a la vez que, los actos de terrorismo no pueden ser ni justificados ni defendidos bajo ningún argumento religioso, étnico, o político. Ahora bien, la Convención de 1999 del bloque africano define el terrorismo como:

- (a) cualquier acto que sea una violación de las leyes penales de un Estado Parte y que pueda poner en peligro la vida, la integridad física o la libertad de, o causar lesiones graves o la muerte a cualquier persona, número o grupo de personas o causas o puede causar daños a propiedad pública o privada, recursos naturales, patrimonio ambiental o cultural. (p, 3)

La definición continúa enunciando las intenciones que deben tener los perpetradores del acto para que este sea considerado terrorista. El primer fin contenido en la Convención de 1999, es el de intimidar, coaccionar, u obligar a un gobierno o a parte de este, a realizar o abandonar alguna acción, así como a forzarlo a tomar cierto punto de vista. El segundo fin enunciado por la Organización para la Unidad Africana, es la interrupción en la prestación de algún servicio público o de cualquier servicio esencial para la población. El tercer fin que un acto puede tener para ser considerado terrorista es el de “crear una insurrección general en un Estado” (OAU, 1999). Además, la Convención de 1999 considera que el apoyo prestado a los autores de estos actos también debe ser considerado un acto terrorista. En este sentido, otro actuar que debe ser considerado como un acto de terrorismo según la Organización para la Unidad Africana (1999) es: “(b) cualquier promoción, patrocinio, contribución, comando, ayuda, incitación, estímulo, intento, amenaza, conspiración, organización o adquisición de cualquier persona, con la intención de cometer cualquier acto mencionado en el párrafo (a).” (p, 4). Bajo esta lógica, los gobiernos que presten su ayuda a grupos que cometen actos terroristas estarían perpetuando en sí, actos terroristas. La Convención de 1999 finaliza con una serie de anexos que contienen instrumentos internacionales relacionados al terrorismo, a su vez, invita a los Estados miembros a firmar y ratificar dichos instrumentos.

El bloque africano, desarrolló la Ley Modelo Africana Anti-Terrorismo, en 2011, la cual de cierta forma brindó otra definición de terrorismo. Un instrumento de *soft law*, la Ley Modelo invita a los Estados miembros a implementar las obligaciones internacionales en contra del terrorismo (Saul, 2019). Obligaciones contenidas en los diferentes instrumentos firmados por los Estados en convenciones de la Organización de Naciones Unidas y de la misma Unión Africana. En este sentido, explica Saul (2019), la Ley Modelo del 2011 define al terrorismo haciendo

referencia a los diferentes tratados y acuerdos suscritos en materia de terrorismo, esto pone en línea a los estándares africanos con los mundiales en materia de definición del terrorismo. Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, no existe una definición única de terrorismo, lo que se traduce en que no hay un tratado, acuerdo, o convención única que dé la definición de terrorismo. Al igual que la Convención de la Organización para la Unidad Africana de 1999, la Ley Modelo de 2011 hace énfasis en la intención de los autores de actos terroristas, en este caso, aquellos que cometan ciertos actos deben buscar “intimidar al público o cualquier sección del público u obligar a un gobierno u organización internacional a hacer o abstenerse de realizar cualquier acto y promover una causa política, religiosa o ideológica” (Unión Africana, 2011). A su vez, la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, cuyo inicio de operaciones está pendiente, será el primer tribunal internacional en conocer de crímenes de terrorismo. El Protocolo de Malabo de 2011, el cual funge como estatuto de la Corte Africana de Justicia, incluyó en sus delitos de conocimiento el de terrorismo, usando la definición otorgada por la Convención sobre la Prevención y el Combate del Terrorismo de 1999.

Ahora bien, si bien no existe una organización que agrupe los Estados asiáticos de la manera que la OEA o la Unión Europea lo hace, la Organización para la Cooperación Islámica (OIC) agrupa a 57 países del Medio Oriente y África. Así, al igual que sus organizaciones pares en Europa y América, la OIC ha buscado tratar el tema del terrorismo en aras de armonizar la materia entre sus Estados miembros. En este punto es importante destacar que, el Norte de África y el Medio Oriente son las regiones del mundo más afectadas por el terrorismo, siendo el lugar con mayor concentración de grupos terroristas y de ataques de estos mismos (Institute for Economics and Peace, 2019). Por consiguiente, en 1999 los Estados miembros de la OIC aprobaron la Convención de la Organización de la Conferencia Islámica sobre la Lucha contra el



Terrorismo Internacional. Al igual que los instrumentos contra el terrorismo de la OEA y la Unión Europea, esta convención tiene su fundamento en la cooperación islámica, y a diferencia de otras organizaciones regionales como la Liga Árabe, la OIC agrupa a Estados de diferentes corrientes del islam (OIC, 2020). Así, la Convención de 1999, cuya entrada en vigor se dio en 2002, creó una directriz para la lucha contra el terrorismo de los Estados miembros, al igual que la mayoría de los instrumentos de organizaciones internacionales, las resoluciones de la OIC no son vinculantes para sus miembros.

En este sentido la Convención de 1999 incluyó una definición para el terrorismo. De acuerdo con el Artículo 1.2 (OIC, 1999), terrorismo significa:

(...) cualquier acto de violencia o amenaza de la misma a pesar de sus motivos o intenciones perpetrados para llevar a cabo un plan criminal individual o colectivo con el objetivo de aterrorizar a las personas o amenazar con dañarlas o poner en peligro sus vidas, honor, libertades, seguridad o derechos o exponer el medio ambiente o cualquier instalación o propiedad pública o privada a peligros u ocuparlos o confiscarlos, o poner en peligro un recurso nacional o instalaciones internacionales, o amenazar la estabilidad, integridad territorial, unidad política o soberanía de Estados independientes.

Esta definición, exige la existencia de un acto de violencia para que exista un acto de terrorismo, esta sin importar los motivos que la fundamenten. Bajo esta lógica, la OIC estaría declarando como terroristas el actuar de organizaciones como Hamás y Hizbulá, organizaciones que han encontrado apoyo entre los Estados miembros de la OIC (Koss, 2018). A su vez, la Convención de 1999 diferencia al terrorismo de la violencia común con fundamento en los motivos del

primero, la definición enuncia una serie de objetivos que debe buscar ese acto de violencia para ser considerado como terrorismo. Esto último hace que esta definición sea amplia, pues el texto de la Convención incluye varias razones por las que un acto de violencia puede ser considerado terrorismo. A su vez, esta definición incluye aquellos actos de violencia que amenacen “la estabilidad, integridad territorial, unidad política o soberanía de Estados independientes” (OIC, 1999), de Estados reconocidos por los miembros de la OIC, pues Israel es blanco de ataques provenientes de grupos terroristas patrocinados por miembros de esta organización.

Ahora bien, aunque la definición de terrorismo parece ser homogénea entre los Estados de la organización internacional objeto de estudio, esta no lo es en la práctica. A lo largo de la existencia de la OIC, Estados miembros han financiado, patrocinado, inclusive han coludido con grupos considerados como terroristas en Occidente para perpetuar ataques en diferentes partes del mundo. En el caso del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, en el que murieron 270 personas y sobre el cual el difunto Gadafi admitió la responsabilidad de Libia en este (BBC, 2011), es claro que para el gobierno libio de la época el autor del atentado, Abdelbaset al-Megrahi, no era terrorista, por el contrario, fue considerado un héroe. Esto último demuestra una clara diferencia frente a la concepción de terrorismo en Occidente y en algunos países árabes. Ahora, si bien la ratificación de la Convención de 1999 fue posterior al atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, ni Gadafi ni el gobierno libio de entonces catalogaron como terrorista dicho ataque. La diferencia entre Estados de Occidente y Estados de la OIC en cuanto al terrorismo se podría reducir a la concepción que ambos bloques políticos tienen sobre ciertos grupos que recurren a ataques terroristas para luchar contra la presencia occidental en la región, considerados por algunos Estados de la OIC como grupos legítimos (2014) A su vez, existen diferencias entre los mismos miembros de la OIC en cuanto a la definición de terrorismo. Al igual que en relación Occidente,

la realidad es distinta en el actuar de algunos Estados de la OIC, las rupturas políticas y las diferencias religiosas han ocasionado que en algunos escenarios Estados musulmanes patrocinen grupos considerados terroristas por los propios Estados de la OIC, un ejemplo de esto es la designación como terrorista de la Guardia Revolucionaria Iraní, una rama de las Fuerzas Armadas de Irán, por Arabia Saudita y Bahrein (Harding, 2020), los tres Estados son miembros de la OIC, partes en la Convención de 1999.

De acuerdo a Sandra Krähenmann (2016), la falta de una definición coherente y universal del terrorismo en el derecho internacional es el principal reto para la cuestión del terrorismo y el Derecho Internacional Humanitario. Tal como se evidenció en esta sección, existen múltiples definiciones, de autores y organizaciones internacionales para el terrorismo, pero ninguna de ellas siendo aceptada de manera universal. Las complejas dinámicas de la política internacional actual, entre otras cosas, no permiten que exista la mencionada definición. Esto pone en riesgo la aplicación del Derecho Internacional Humanitario al poner en entredicho su aplicación para actores terroristas en conflictos armados. El vacío que existe sobre la definición del terrorismo crea a su vez un vacío en el Derecho Internacional Humanitario, dejando la aplicación de esta rama del derecho a la interpretación de los demás actores del conflicto. Krähenmann (2016) destaca que actualmente existen aproximadamente 19 convenciones que regulan actos de terrorismo aislados, sin una definición general. En el mismo sentido, no existe un convenio internacional que regule los actos de terrorismo durante el conflicto, que, si bien los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales hacen referencias a esto, son vagos y poco explícitos. Por esto, vale la pena analizar tanto los postulados del Derecho Internacional Humanitario y su relación con el terrorismo.

#### 4. El terrorismo en el Derecho Internacional Humanitario

##### *4.1. Ius in bello*

La evolución de la forma en la que los seres humanos hacen la guerra ha estado acompañada de las regulaciones de esta. El *ius in bello* o Derecho Internacional Humanitario, es la rama del derecho internacional que regula las conductas de los combatientes durante un conflicto armado. En este sentido, su objetivo es el de limitar las consecuencias de los conflictos, a través de la protección de aquellos que no participan de estos, y a través de la prohibición de métodos y armas que alarguen de manera innecesaria el sufrimiento de los combatientes (CICR, 2010). A su vez, el Derecho Internacional Humanitario no se preocupa por las razones o legalidad de los conflictos armados, este se preocupa exclusivamente por la realidad del conflicto, de sus no combatientes, y de sus combatientes.

En este sentido, el Derecho Internacional Humanitario cubre dos ámbitos de los conflictos, el de la protección de aquellos que no participan del conflicto o que han abandonado las armas por alguna razón, y algunas restricciones de los medios de guerra, como las armas y los mecanismos empleados por los combatientes (CICR, 2004). Así, el Derecho Internacional Humanitario protege la vida y la integridad física y moral de los no combatientes. Estas personas no pueden ser víctimas de torturas o tratos inhumanos, en el mismo sentido se les deben respetar todos sus derechos y deben ser objeto de garantías judiciales. A su vez, se prohíbe dar de baja a un adversario que ya ha dejado las armas, al igual que a los heridos en combate y prisioneros de guerra, o aquellos que se encuentran fuera de combate, pues estos están en una situación de indefensión. De igual manera, el personal médico y religioso no puede ser blanco de ataques

durante un conflicto, así estos estén adscritos a las fuerzas militares o fuerzas insurgentes combatientes (CICR, 2004).

Así mismo, el Derecho Internacional Humanitario restringe algunos métodos de guerra con el objetivo de hacer de esta más humana. Así, esta rama del derecho internacional ha prohibido el uso de armas que no distingan entre combatientes y no combatientes, como algunas piezas de artillería y las denominadas bombas de racimo. De igual manera, ha prohibido el uso de municiones y armas que no tienen el objetivo de causar la muerte del adversario, sino de causar daños superfluos que alargan el sufrimiento de una manera innecesaria. Por último, se ha prohibido el uso de armas que ocasionen un daño grave y duradero al medio ambiente, así, el Derecho Internacional Humanitario no solo se ha preocupado por la vida e integridad de los seres humanos en el conflicto, sino también por los impactos ambientales de este (CICR, 2004). Como resultado de estas prohibiciones, se ha proscrito el uso de algunas armas como la munición explosiva, las armas químicas y biológicas, las armas de láser que causan ceguera, entre otras.

Una de las características del Derecho Internacional Humanitario es su aplicación exclusiva durante un conflicto armado. Es decir, las normas de esta rama del derecho solo se aplican a situaciones donde exista un conflicto armado, tanto internacional como interno (CICR, 2004). En este sentido, el Derecho Internacional Humanitario no cubre a nivel nacional casos de desordenes internos o de violencia interna, solo podrá predicarse la aplicación de este cuando existan enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y algún grupo insurgente capaz de equiparar el poder de este. En el resto de los casos, es decir, en la ausencia de un conflicto, los Derechos Humanos se convierten en el instrumento aplicable.

Ahora, si bien las normas que han regulado la guerra se encuentran en diversos tratados y convenciones, el hito de estas fue la suscripción de los Convenios de Ginebra en 1949. Los convenios fueron un punto de quiebre en la forma en la que se desarrollaban los conflictos, pues en estos se compilaron algunos principios, costumbres, y otras normas de la guerra, algo que humanizó el conflicto. Así, en 1949 se firmaron cuatro convenios, dos protocolos adicionales en 1977, y un protocolo adicional en 2005. Cada documento versa sobre un tema de Derecho Internacional Humanitario que ha regulado el conflicto. Así, el primer convenio, firmado en 1949, versa sobre el tratamiento de heridos y enfermos de guerra en situación de conflicto. Así, este Convenio busca proteger al sector de los combatientes que han sido heridos y que no pueden continuar los combates. De esta forma, existe el deber de todos los partidos del conflicto de atender a los heridos, tanto de su propio bando, como de los adversarios (CICR, 2014). En este sentido, el deber de atender a los heridos no se limita a esto, pues las partes de un conflicto tienen deberes frente a los muertos en combate, como la repatriación o sepultura. A su vez, este Convenio protege el personal médico y religioso de las fuerzas combatientes, las cuales bajo ninguna circunstancia podrán ser blancos militares. En ese sentido, se reconocen algunos símbolos distintivos de este personal, lo que permite al adversario reconocer instalaciones médicas, religiosas, entre otras.

El segundo de los convenios versa sobre heridos, enfermos, y náufragos de guerra, en conflictos o enfrentamientos navales. Al igual que el primer convenio, este busca la misma protección adaptada a la guerra marítima. En el mismo sentido, tanto náufragos como heridos deben ser rescatados por cualquier parte del conflicto, en estos casos, las fuerzas adversarias podrán determinar si es necesario el envío del herido a un puerto propio o de la parte contraria (CICR, 2014). El Convenio protege, además, los buques hospitales, de la misma forma que

protege al personal y las instalaciones médicas en combates terrestres. Así, también se extiende esta protección a buques y navíos neutrales, cuya función sea el tratamiento de heridos o rescate de náufragos, así como de embarcaciones civiles.

En cuanto al tercer convenio, este trata la situación de los prisioneros de guerra, reemplazando así el Convenio sobre Prisioneros de Guerra de 1929. A diferencia del Convenio de 1929, este describió con mayor precisión las categorías y características para adquirir el derecho de ser reconocido como prisionero de guerra. A su vez, los prisioneros de guerra son objeto de las protecciones contenidas en los Convenios I y II. En el mismo sentido, se precisaron asuntos sobre el trabajo de estos prisioneros, los lugares de reclusión, los derechos a los que tienen derecho, entre otros. Ahora bien, este Convenio exige que una vez finalicen las hostilidades, todos los prisioneros de guerra deben ser liberados sin demora alguna (CICR, 2014).

Ahora bien, el cuarto convenio busca proteger a la población civil durante el conflicto, inclusive establece el estatuto referente a los territorios bajo ocupación. La Segunda Guerra Mundial sirvió como evidencia de los daños que la población civil podía recibir durante un conflicto armado, por esto se creó un estatuto específico para esta. A su vez, definió las normas para las personas protegidas, de los extranjeros en el territorio de una de las partes combatientes, y de los civiles en algún territorio bajo ocupación (CICR, 2014). En territorios ocupados, la población civil tiene derecho a recibir ayuda humanitaria como alimentos y servicios de salud, la cual debe ser permitida por la parte ocupante.

No obstante, el artículo 3 común a todos los convenios trata la aplicación de estos a los conflictos no internacionales. El artículo 3 común establece algunos mínimos de aplicación

respecto a los conflictos no internacionales, los cuales no pueden ser desconocidos bajo ninguna circunstancia por las fuerzas combatientes. De acuerdo a artículo común, las personas no participantes de las hostilidades deben recibir un trato humano si estos caen en poder de la otra parte del conflicto interno. A su vez, se prohíbe de manera específica “los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes” (CICR, 2014). Bajo esta lógica el artículo común ordena que se deben ofrecer todas las garantías judiciales para los combatientes, algo que resulta difícil de pensar cuando un miembro de las fuerzas del Estado cae en manos de grupos insurgentes terroristas. Así, se debe ofrecer asistencia a los heridos y permitir las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja en términos de asistencia.

De igual manera, en 1977 y 2005, fueron suscritos tres protocolos adicionales, dos en 1977 y uno en 2005. El primero de estos protocolos adicionales es referente a los conflictos internacionales, el segundo a los conflictos no internacionales, y el tercero frente a la adopción de otro símbolo distintivo del Comité Internacional de la Cruz Roja. A grandes rasgos, los dos primeros protocolos adicionales reforzaron los postulados de los cuatro convenios en cuanto a la protección de los no combatientes y las limitaciones a ciertos mecanismos de hacer la guerra (CICR, 2014). En este sentido, el Protocolo Adicional II fue el primer tratado internacional en enfocarse exclusivamente en conflictos no internacionales. Este protocolo buscó ampliar las garantías y protecciones en los conflictos no internacionales. Así, estableció una lista de garantías fundamentales a las que tienen derecho los combatientes en este tipo de conflictos, al igual que una serie de prohibiciones a las que no pueden recurrir los combatientes, vale destacar que una de estas prohibiciones son los actos de terrorismo. Este protocolo amplió las disposiciones del artículo 3 común, ya que, al ser un instrumento exclusivamente para conflictos no internacionales



es el que está llamado a aplicarse en dichos conflictos. Vale la pena aclarar que este protocolo no ha sido ratificado por diferentes Estados como Estados Unidos, Israel, y Turquía, actores militares de gran relevancia en los conflictos modernos.

#### 4.2. Terrorismo y el Derecho Internacional Humanitario

Ahora bien, teniendo en cuenta que la mayoría de los conflictos en la actualidad son entre Estados y fuerzas insurgentes, y que las diferencias entre las capacidades de estos hacen que las insurgencias recurran a métodos terroristas, vale la pena analizar la relación entre el Derecho Internacional Humanitario y el terrorismo. En este sentido, la lucha contra el terrorismo ha sido considerada, desde diferentes perspectivas, como un conflicto internacional y no internacional (Dinstein, 2014), esta distinción acarrea una serie de consecuencias en términos de las normas del Derecho Internacional Humanitario que se deben aplicar. A su vez, resulta importante estudiar los posibles significados que el Derecho Internacional Humanitario le ha dado al terrorismo, así como las implicaciones de dicha definición. Así, la relación entre esta rama del derecho internacional y los grupos terroristas ha sido compleja y ha tenido posiciones encontradas dependiendo de quien la analice.

Si bien es claro que el terrorismo afecta a distintos países en el mundo y que en diversos casos los grupos terroristas cruzan fronteras para eludir la justicia o inclusive para cometer ataques, la caracterización de la lucha contra el terrorismo ha sido conflictiva. Es sabido que la distinción entre conflicto armado internacional y conflicto armado no internacional podrá, según algunas posturas, reducirse a las características de los actores, es decir, si aquellos enfrentados son Estados o grupos insurgentes (Dinstein, 2014). En relación al ámbito territorial de los

conflictos, la Corte Suprema de Estados Unidos, a través del caso *Hamdan v. Rumsfeld* (2005), estimó que algunos de los juicios militares llevados a cabo por las comisiones militares posteriormente a la intervención en Afganistán que estableció la administración Bush, violaban el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, al ser la norma aplicable en estos casos. Bajo esta lógica, y teniendo en cuenta que Estados Unidos no ratificó ninguno de los dos protocolos adicionales, la corte suprema de este país reconoció el carácter de no internacional de la lucha contra el terrorismo, ya que aplicó el artículo 3 común y no las otras convenciones. Por el contrario, autores como Dinstein (2014), consideran que afirmar que la lucha contra el terrorismo no puede ser considerada como interna, ya que se crea una contradicción frente a algunas actuaciones que son consideradas como internacionales y otras internas. A lo que se refiere Dinstein (2004) es que un conflicto no puede ser internacional y no internacional a la vez, siendo esta una dicotomía que no se puede alterar. Así, la lucha contra el terrorismo islámico por parte de Occidente no puede aplicar las reglas para conflictos internos del Derecho Internacional Humanitario a conflictos que considera internacionales, bajo esta lógica, la norma aplicable serían los Convenios en su totalidad.

Por otra parte, Saul (2014) afirma que existen diferentes escenarios en los cuales se puede dar la concurrencia de actividades terroristas en conflictos internacionales. El primero de estos escenarios son los enfrentamientos estatales donde una de las partes recurre al terrorismo de Estado con el objetivo de obtener una ventaja y doblegar a su adversario. Otro posible escenario es el uso de fuerzas irregulares por parte de un Estado en contra de otro, tal como el caso Hizbulá e Irán (DeVore, 2012) en contra de Israel. Bajo la lógica de la Carta de las Naciones Unidas (1945), esto podrá constituir un acto de agresión, por ende, la existencia de un conflicto internacional; esto podrá constituir dicho acto siempre y cuando los grupos pertenezcan al

Estado, algo que es en la práctica imposible de probar por la clandestinidad de estos grupos. En casos como los de Al Qaeda o las FARC, si bien existen indicios sobre los nexos de estos grupos con algunos gobiernos, no es posible afirmar que estos estén bajo el control total de un Estado. Un tercer evento en el que se puede dar un conflicto internacional es en los casos de resistencia por parte de los civiles de una invasión extranjera, cuando ocurre un levantamiento armado por parte de la población civil, en la mayoría de estos casos, los levantamientos recurren a ataques y sabotajes que pueden ser catalogados como actos de terrorismo (Saul, 2014), esto mismo podría aplicarse para situaciones de ocupación militar. Una cuarta situación donde se puede dar el caso en cuestión es cuando un grupo de liberación nacional es dotado del reconocimiento establecido en el Protocolo Adicional I, esto por la naturaleza de los conflictos de liberación (Saul, 2014), en los que no hay un enfrentamiento entre un gobierno y su población sino entre la población de un territorio y un gobierno extranjero. Los casos de los grupos de liberación palestinos o en Sahara Occidental, son ejemplos de situaciones de terrorismo que a simple vista pueden ser no internacionales, pero que por sus características particulares son considerados internacionales. Independiente de las normas de Derecho Internacional Humanitario que se pretendan aplicar, es en estos escenarios donde se puede dar la participación de grupos terroristas en conflictos internacionales.

Como se dijo anteriormente, no hay duda sobre la internacionalización de la amenaza del terrorismo, ejemplo de esto son atentados cometidos por grupos islámicos en Europa y América del Norte, o por grupos colombianos en Ecuador; sin embargo, los grupos terroristas no pueden ser dotados de las mismas cualidades que los Estados, por ende, los conflictos que no involucran Estados no deben ser considerados como internacionales. A su vez, no se cuestiona el hecho de que la lucha contra el terrorismo ha provocado enfrentamientos internacionales entre Estados

como los casos de Afganistán en 2001 o Libia en 1986, no obstante, la lucha contra grupos insurgentes terroristas como el ELN o Al Qaeda no supone un enfrentamiento internacional. En relación a los Convenios y Protocolos Adicionales de Ginebra, el hecho de reconocer que la lucha contra el terrorismo constituye un conflicto armado internacional, supone que, los estatutos aplicables para este caso serían los convenios en su totalidad, no el artículo 3 común o el Protocolo Adicional II, algo que limitaría aun más el actuar de las fuerzas estatales y que dotaría a los terroristas de mayor libertad para actuar y que los pondría en el mismo plano del Estado.

Ahora bien, independiente de las consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los conflictos que involucran grupos terroristas, es importante ver el estatus que se les reconoce a estos grupos. En este sentido, los participantes de un conflicto armado internacional o no internacional podrán ser combatientes, sean parte de las fuerzas de un Estado o de un grupo insurgente. Para que los miembros de un grupo insurgente sean considerados como combatientes, es decir, beneficiarios de las normas de Derecho Internacional Humanitario que se aplican a los conflictos no internacionales, es necesario que estos cumplan ciertos requisitos. De acuerdo a las normas de Derecho Internacional Humanitario, los grupos insurgentes deben estar subordinados por una cadena de mando y una jerarquía; portar sus armas de manera visible para el adversario; usar símbolos distintivos que sean reconocibles en la distancia; y actuar y conducir operaciones acordes al Derecho Internacional Humanitario (CICR, 2020). Ahora bien, es en este último requisito donde fallan los grupos terroristas. Es posible reconocer que algunos grupos insurgentes en América Latina, África, y el Sudeste Asiático usan uniformes, símbolos distintivos, y exhiben sus armas semejantes a las fuerzas regulares del Estado; sin embargo, estos grupos recurren a actos de terrorismo, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario. En cuanto a los casos

de terrorismo en el Medio Oriente y el Norte de África, es común que los miembros de los grupos terroristas ni siquiera usen símbolos que los distingan de la población civil.

Siguiendo la lógica expuesta por Saul (2014) y por el Comité Internacional de la Cruz Roja (2020), los grupos que no actúan bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario no deben gozar del estatus de combatiente y por consecuencia de las protecciones que estos reciben en cuanto a los Convenios y Protocolos Adicionales de Ginebra. Para estos grupos que no pueden ser considerados ni civiles ni combatientes, se ha propuesto la designación de combatientes ilegales (CICR, 2020). La consecuencia de ser catalogados como combatientes ilegales, radica principalmente en que se pierden los privilegios en cuanto a detenciones, es decir, los combatientes ilegales no pueden ser tratados como prisioneros de guerra ni como civiles en centros de reclusión. De este postulado se puede entender que los miembros de grupos terroristas pueden ser juzgados como criminales corrientes, bajo la ley del país que los captura. En casos de terrorismo doméstico como el caso de Sendero Luminoso en Perú, es posible afirmar que sus miembros deberán ser juzgados bajo las normas penales de Colombia, y ser extraditados en vigencia de un tratado de extradición, en estos casos no habrá mayor debate. Ahora bien, podrá existir debate o diferentes posiciones con los casos de terrorismo internacional, donde a raíz de una intervención militar se detienen a una serie de combatientes ilegales, los cuales posteriormente son juzgados por autoridades militares extranjeras. Así, las normas de Derecho Internacional Humanitario no son claros en cuanto a los términos de detención de estos combatientes, lo que ha permitido interpretar que estos no gozan de protección particular frente a las detenciones, esta interpretación no es errónea. Bajo esta lógica fue que se detuvo a algunos terroristas en el Medio Oriente y posteriormente fueron trasladados a bases estadounidenses en Guantánamo y en Irak. Ahora, aunque hay un vacío en cuanto a las detenciones de terroristas,

está claro que no se debe desconocer el derecho internacional de los Derechos Humanos, la rama del derecho que regularía esta materia, así, aunque las normas del conflicto den cierta libertad de actuación en relación a la detención de terroristas, se debe ser cauteloso con los tratos inhumanos. Ahora bien, Saul (2014) reconoce que, si bien las regulaciones del Derecho Internacional Humanitario respecto a los terroristas son difusas, otras regulaciones como los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR por sus siglas en inglés) deben ser las aplicables, pues este autor parte del entendimiento que si una ley especial, en este caso el Derecho Internacional Humanitario, tiene algún vacío, este se debe llenar con la ley general, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En relación a los procesos judiciales para juzgar a los terroristas, Saul (2014) advierte que la mayoría de los juicios no se llevan a cabo con el mínimo cumplimiento de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario. Como se dijo anteriormente, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y la subsecuente “guerra al terror” provocaron un desencadenamiento de detenciones y juicios que violan los Derechos Humanos; sin embargo, antes de dichos ataques, ya existían violaciones en cuanto a las garantías judiciales en el procesamiento de terroristas. El artículo 3 común de los Convenios de Ginebra dispone que en conflictos armados no internacionales los insurgentes deben recibir un juicio justo de acuerdo a las leyes de cada país. Sin embargo, en diferentes países y en sus luchas contra grupos terroristas, se adoptaron una serie de medidas para hacerle frente desde los poderes judiciales al terrorismo. Un ejemplo de esto son los jueces sin rostro que se implementaron en conflictos como el colombiano y el peruano; o las distintas comisiones militares que fueron adoptadas por Estados Unidos para procesar terroristas. Si bien estos procesos podrían parecer una violación al Derecho Internacional Humanitario, no

debe desconocerse que la mayoría de los grupos terroristas no pueden ser considerados como actores combatientes dentro de un conflicto.

Retomando la cuestión de la naturaleza de los actores terroristas, en otro de sus textos, Saul (2006) reconoce que no existe la necesidad de crear una categoría dentro del Derecho Internacional Humanitario para los terroristas, tal como ocurre con los mercenarios o los espías. El autor australiano parte del reconocimiento que los actos de terrorismo pueden ser cometidos por combatientes o por no combatientes, y que dependiendo de estas categorías se debe proceder. Es decir, un grupo de soldados de un Estado o de insurgentes podrán cometer actos de terrorismo, por lo que podrán ser responsables de crímenes de lesa humanidad o de guerra, tal como se estableció anteriormente en este texto. De la misma manera, un civil podrá cometer actos de terrorismo y ser procesado penalmente por esto. En ambos casos, existe una prohibición de cometer actos de terrorismo, la diferencia radica en las leyes que se deben aplicar para el procesamiento de este acto. Sin embargo, es importante hacer la distinción en actos de terrorismo dentro de un conflicto armado, bien sea internacional o no internacional, y fuera de este.

Por el contrario, Bartels (2016) estima que existen ciertas circunstancias en las que un grupo terrorista puede ser considerado como parte en un conflicto armado no internacional. Así, para que una situación armada sea considerada un conflicto, deben confluir las características de un cierto grado de intensidad y de la organización de las partes combatientes. De esta forma, los casos de terrorismo aislado y esporádico no podrán ser ni siquiera considerados para ser un actor combatiente. Así, suponiendo la existencia de un conflicto armado no internacional por la intensidad de los enfrentamientos, existen algunos factores referentes a la estructura y organización que debe cumplir un grupo terrorista para encajar dentro de la definición de grupo

combatiente. Estos cinco factores fueron extraídos por Bartels (2016) de la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). En este sentido, el primer factor es la existencia de una estructura de comando. Ejemplos de esto es la existencia de una base de operaciones, de rangos e insignias, inclusive la emisión de comunicados políticos. Frente a este factor, son pocos los grupos terroristas modernos que lo cumplen, esto debido a que una de las características comunes a los grupos terroristas es la clandestinidad; sin embargo, existen grupos con control sobre zonas geográficas que sí cumplen este requisito, tal como ISIL en su momento de mayor extensión. El segundo factor es la capacidad operacional militar del grupo; este factor se refiere a la capacidad que tiene un grupo terrorista en llevar a cabo ataques a gran escala de manera coordinada. Un ejemplo de esto son la toma completa de ciudades en el Medio Oriente por ISIL. El tercer factor que expone Bartels (2016) es la existencia de capacidad logística; en este caso los grupos terroristas deben tener cadenas de suministro de armas y materiales. El cuarto factor hace referencia a la existencia de un sistema de “disciplina” interno, y la capacidad de implementar dicho sistema. Este factor significa que los grupos terroristas deben tener mecanismos de control para controlar a sus miembros mediante sanciones que pueden implementar. Sin embargo, en ocasiones estos mecanismos de control han sido aplicados mediante ejecuciones, torturas, entre otros. El cuarto y último factor se refiere a la habilidad del grupo de tener una dirección única. Esto quiere decir que el grupo terrorista tiene una jerarquía clara y una estructura de toma de decisiones que le permite realizar actos en nombre de todo el grupo. Bartels (2016) hace alusión a esto por la capacidad de pactar ceses al fuego o acuerdos de terminación de conflictos en nombre de todo el grupo, y que este se acople a dicho acuerdo. Por ejemplo, las FARC, si bien contaban con una estructura ordenada y tenían un liderazgo establecido, disidencias del grupo no se acogieron a los acuerdos de “paz” suscritos con el gobierno de Colombia. Así, Bartels (2016)



afirma que, si bien estos factores fueron sustraídos de la jurisprudencia de tribunales internacionales, eso no quiere decir que para que un grupo terrorista sea considerado como parte de un conflicto armado no internacional este deba cumplir los cinco requisitos; existen diversos grupos insurgentes que no cumplen la totalidad de estos requisitos, y que recurren, o no, a tácticas terroristas.

A su vez, es importante leer los postulados de Bartels (2016) en armonía con lo expuesto por Ben Saul (2014) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (2020), a lo que se hizo alusión anteriormente en este texto. Los requisitos del TPIY y del TPIR no pueden ser analizados sin tener en cuenta los demás factores, resaltando el referente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Al afirmar esto se afirma también que, bajo ninguna circunstancia, un grupo terrorista podrá ser considerado como combatiente parte de un conflicto. Es decir, el Derecho Internacional Humanitario prohíbe bajo cualquier circunstancia los actos de terrorismo, por lo que llevar a cabo actos de este tipo sería contrario a esta rama del derecho internacional. En este sentido, cualquier grupo que ejecute actos terroristas no estaría dando cumplimiento a las normas del conflicto armado, por lo que no debe ser considerado como combatiente parte de un conflicto, por el contrario, debe darse la categoría ya mencionada de combatiente ilegal.

Por su parte, Gasser (2002), parte de la noción que la mayoría de los actos de terrorismo están ligados de alguna forma a un conflicto. Los actores de un conflicto recurren a actos de terrorismo como resultado de una desventaja en un conflicto o una negociación fallida. Ejemplo de esto es la ola de atentados durante la década de 1970 con ocasión del conflicto árabe israelí, a su vez, la invasión liderada por Estados Unidos en contra de Afganistán en 2001 tuvo su fundamento en el terrorismo y la lucha contra este. En este sentido, el incremento de actos de

terrorismo con ocasión de un conflicto, o durante este, es una violación a las regulaciones del conflicto; los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, prohíben dichos actos perpetuados por cualquier actor, por lo que no es necesario reformarlos en este sentido. Esta conclusión de Gasser (2002) fue establecida por el mismo autor en uno de sus textos en 1986, en este sentido, el autor afirma que, desde entonces, el mundo ha tenido ciertos cambios que han impactado el Derecho Internacional Humanitario y el terrorismo. El primero de estos cambios es la desaparición de la bipolaridad mundial, es decir, la existencia de una sola superpotencia hegemónica permite que este Estado actúe con mayor libertad en términos de seguridad, o sea frente al terrorismo. Otro cambio que el mundo ha visto es el fin de la descolonización, y, en consecuencia, el fin de la mayoría de los movimientos de liberación nacional. La frontera entre los movimientos de liberación nacional y los grupos terroristas era difusa, por lo que la lucha contra estos era un reto del Derecho Internacional Humanitario. A su vez, el avance en términos de telecomunicaciones ha permitido tanto a Estados como a grupos terroristas llegar más lejos en la promoción de sus objetivos y en la difusión de información, ejemplo de esto es la difusión de brutalidades como decapitaciones por parte de ISIL. En cierta medida, algunos grupos terroristas han utilizado los medios de comunicación como arma para impartir terror entre la población civil, mostrando a través de noticieros y canales clandestinos lugares donde retienen rehenes ilegales, propaganda, sitios de entrenamiento, tácticas, entre otros. Así, desde 1986 la comunidad internacional ha empezado a reconocer en mayor medida el respeto por los Derechos Humanos y por las normas que regulan el conflicto. La mayoría de estos cambios benefician al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Sin embargo, los Estados, especialmente de Occidente, han mostrado una vocación por perseguir grupos terroristas alrededor del mundo (Gasser, 2002). La “guerra al terror” ha sido la

justificación para que Estados como Estados Unidos, Reino Unido, y Australia ejecuten operaciones militares en territorio extranjero con el fin de capturar o dar de baja a los responsables de ataques terroristas. De igual manera, la lucha contra el terrorismo ha justificado las acciones armadas en contra de otros Estados que patrocinan grupos terroristas. Estas intervenciones en el extranjero resultan ser retos para el Derecho Internacional Humanitario por la débil regulación que existe por parte de este y los vacíos que este presenta, vacíos que permiten distintas interpretaciones. Además, es de resaltar que, el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1977, el cual es el instrumento del Derecho Internacional Humanitario llamado a regular asuntos de conflictos armados no internacionales, dentro de los cuales es preciso enmarcar la lucha contra el terrorismo, no ha sido ratificado por la totalidad de Estados, lo que no lo hace vinculante para estos.

En el mismo sentido, Gasser (2002) explica que uno de los principales objetivos del Derecho Internacional Humanitario es asegurar que la fuerza solo sea empleada por las fuerzas combatientes, y en contra de estas mismas únicamente. Así, estos dos factores se vuelven claves para ver las violaciones del terrorismo al Derecho Internacional Humanitario. La primera de estas características, es decir, la exclusividad del uso de la fuerza no aplica para grupos terroristas, ya que, como se dijo anteriormente, los grupos terroristas en su mayoría no cumplen los requisitos para ser considerados combatientes, a su vez, aquellos grupos insurgentes que en principio podrían ser considerados combatientes dentro de un conflicto armado no internacional, deben perder este estatus al recurrir a tácticas terroristas, tal como el caso del ELN en Colombia. A su vez, el Derecho Internacional Humanitario no permite el uso indiscriminado de cualquier mecanismo de combate, algo a lo que recurren los terroristas para tratar de igualar la superioridad militar de los Estados en la Guerra Híbrida (Hoffman & Mattis, 2005) mencionada anteriormente.

En el mismo sentido, la población protegida durante los conflictos, principalmente la población civil, no puede, en principio, ser objetivo del actuar militar de los combatientes, esta es la segunda característica propuesta por Gasser (2002). Así, la protección a la población civil se ve violentada con los ataques terroristas que atentan contra esta misma. Como se evidenció anteriormente, los ataques terroristas modernos tienen como objetivos la población civil, ya que con estos logran un mayor impacto de crear terror y caos, ejemplo de esto es el ataque por parte de las FARC al Club El Nogal en Bogotá. Adicional a esta violación del Derecho Internacional Humanitario, el terrorismo ha recurrido al uso de armas prohibidas por esta rama del derecho; en ocasiones, este ha utilizado armas químicas en contra de la población civil, tanto en el marco de un conflicto como lo fue el uso de bombas de cloro por parte de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil en 1990 (Hoffman, 2009), o por fuera de un conflicto armado como lo fue el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995 (History, 2019).

Bajo esta misma lógica, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, prohíben la ejecución de ataques discriminados durante los conflictos, debido a que estos no respetan el principio de distinción. Así, el Protocolo Adicional I de 1977 prohíbe ataques que no puedan ser dirigidos a un objetivo militar específico, o que no puedan ser limitados de acuerdo a las normas del conflicto armado. Bajo esta óptica, los ataques terroristas consistirían en una violación directa al Derecho Internacional Humanitario, ya que, en primer lugar, sus ataques están dirigidos contra la población civil y, aquellos que no están dirigidos a la población civil, son realizados bajo mecanismos que no discriminan entre militares y civiles (Gasser, 2002). Sin embargo, los grupos y actores terroristas no se rigen bajo las reglas del Derecho Internacional Humanitario; estos grupos no actúan bajo las mismas circunstancias que el resto de los combatientes. Gasser (2002) concluye sobre estos postulados que debido a que el terrorismo en contra de la población y la

infraestructura civil está prohibido por la Cuarta Convención y los protocolos adicionales de Ginebra, los actores terroristas deben ser juzgados por tribunales locales, e inclusive, podrían ser objeto de responsabilidad internacional bajo el Estatuto de Roma.

Ahora bien, es claro que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe los actos de terrorismo en contra de la población, de la misma manera que prohíbe ataques por parte de las fuerzas de un Estado en contra de esta. Sin embargo, vale la pena analizar la posición de esta rama del derecho internacional en cuanto a los ataques conducidos en contra de objetivos militares por grupos terroristas. Como se anotó anteriormente, los actores terroristas se encuentran ubicados en una categoría que no los hace parte de la población no combatiente pero tampoco los hace combatientes legales (CICR, 2020). A su vez, es importante destacar que las fuerzas militares de los Estados o un grupo insurgente combatiente, pueden ser objeto de ataques militares, así como pueden conducir ataques militares. Así, en principio los levantamientos armados por parte de civiles en un conflicto armado se encuentran cobijados por el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta que estos levantamientos pueden recurrir a tácticas no convencionales militares; sin embargo, el derecho de escoger la forma de llevar a cabo los combates no es ilimitado (Gasser, 2002). En este sentido, tanto civiles en levantamientos armados, como combatientes, tienen límites a su actuar; en cuanto a las armas empleadas y a las tácticas de combate. Uno de estos límites a la guerra es la prohibición de la perfidia, en donde un combatiente realiza actos de violencia bajo engaños y actuaciones traicioneras. Un ejemplo de esto es el uso falso de banderas blancas o de símbolos característicos de organizaciones humanitarias. Así, el terrorismo moderno se mezcla entre la población civil y lleva a cabo actos para engañar a sus enemigos, y lograr un mayor impacto con sus ataques, en este caso en contra de fuerzas militares. Ejemplo de esto son los ataques suicidas ejecutados por terroristas islámicos

donde estos buscan parecer miembros de la población civil para acercarse a blancos militares, de la misma manera en que terroristas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia o del IRA se disfrazaban de civiles para implantar vehículos llenos de explosivos en instalaciones oficiales. De esta manera, Gasser (2002) permite concluir que los ataques terroristas en contra de objetivos militares también son de naturaleza ilegal, pues violan los postulados del Derecho Internacional Humanitario sobre los límites a la guerra.

Gasser (2002) destaca que los ataques perversos no son las únicas violaciones del Derecho Internacional Humanitario de los grupos terroristas, existen otras actuaciones características de grupos terroristas que atentan contra las normas del conflicto. Así, otra conducta que es repetidamente realizada por grupos terroristas, son los asesinatos de sujetos que han depuesto las armas, es decir, de aquellos que se han rendido o han sido heridos y no se encuentran en condiciones de seguir los combates. En estos supuestos, los actores terroristas recurren a asesinatos voluntarios o ejecuciones de estos sujetos, los cuales gozan de una protección especial por el Derecho Internacional Humanitario. En el mismo sentido, las normas del conflicto prohíben la toma de rehenes en conflictos armados no internacionales, por parte de grupos insurgentes, y en caso de que estos rehenes fueran considerados prisioneros de guerra, como pretenden algunos, el Derecho Internacional Humanitario les brinda una protección especial, prohibiendo los tratos inhumanos (Gasser, 2002). En estos casos, las condiciones en las que los rehenes secuestrados son recluidos se vuelven una de las principales violaciones a la mencionada protección. En este sentido, las torturas físicas y mentales a las que pueden ser sometidos estos secuestrados son ilegales y van en contra de las normas de la guerra. Ahora bien, la mencionada violación de tomar rehenes empeora cuando estos grupos recurren al secuestro de civiles, algo que resulta ilegal dentro del Derecho Internacional Humanitario y dentro de la mayoría de las

legislaciones del mundo. Ejemplo de estos secuestros por parte de grupos terroristas son los casos de secuestrados de las Brigadas Rojas en Italia. Sin embargo, como se dijo anteriormente, estos grupos y los demás grupos terroristas no actúan bajo el Derecho Internacional Humanitario.

Sobre el mismo asunto, a través del reporte presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2015 a la Conferencia de dicha organización, se destacó la necesidad de no confundir la regulación del Derecho Internacional Humanitario sobre el terrorismo y el conflicto armado. En el mismo sentido, se ha dejado claro que, durante los conflictos, se permite el uso de la fuerza y de la violencia, mas no cualquier tipo de violencia, esta postura es respaldada por la Cruz Roja (2015). Así, esta organización ha enfatizado en la dicotomía de las acciones armadas legales e ilegales, siendo el terrorismo un ejemplo de acciones armas armadas ilegales. A su vez, existe una diferencia entre el marco legal que regula el terrorismo y el Derecho Internacional Humanitario, y es en lo referente a la igualdad de los actores (CICR, 2015). En cuanto a los combatientes, el Derecho Internacional Humanitario tiene un tratamiento igual para los combatientes, sean estos miembros de un Estado o de un grupo armado no estatal; bajo esta normatividad todos los combatientes deben tener el mismo tratamiento, ya que esta no busca analizar la legitimidad de los actores sino el cumplimiento de ciertos postulados para humanizar el conflicto armado. En este sentido, tanto los Estados como los grupos insurgentes deben, bajo la óptica del Derecho Internacional Humanitario, cumplir las normas que regulan el conflicto. Por el contrario, y dado a la falta de una regulación “universal” frente al terrorismo, el marco legal para combatirlo ha sido predominantemente de carácter interno de cada Estado. Por esta razón, en la totalidad de los Estados, el terrorismo es penalizado, y criminalizando a aquellos que cometen actos de terrorismo. Esto último significa un reto para el Derecho Internacional Humanitario ya que, por razones políticas, se designa a cualquier grupo no estatal como terrorista, transformando

de combatientes a terroristas y criminales a sus actores (CICR, 2015). No obstante, este uso del término terrorista no es del todo equivocado, ya que según el mismo reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja (2015), los grupos insurgentes recurren cada vez más a tácticas terroristas.

Sin embargo, la Cruz Roja (2015) no desconoce la posibilidad de que los regímenes legales del conflicto y del terrorismo puedan tener interacciones o puntos en común, pues ambos prohíben los actos de terrorismo, especialmente cuando estos se realizan en contra de la población civil. No obstante, los actos armados cometidos en contra de objetivos militares no deben ser considerados como ataques terroristas, ya que la esencia del conflicto armado es atacar al enemigo. Bajo esta lógica, los ataques suicidas en contra de bases militares en Afganistán, o los mismos ataques en contra de bases de policía en Colombia, no deben ser considerados como terroristas, pues sus objetivos son blancos legítimos bajo el Derecho Internacional Humanitario (CICR, 2015). Designar estos ataques como ilegales, sería “contrario a la realidad de los conflictos armados y la razón fundamental del Derecho Internacional Humanitario” (CICR, 2015). A su vez, designar actos legales bajo el Derecho Internacional Humanitario como terroristas puede provocar que los actores no estatales desconozcan cada vez más las normas del conflicto; si estos actúan bajo dichas normas, e indiferente de esto son designados como terroristas, no habrá motivación para estos de continuar este cumplimiento, y las consecuencias podrán ser peores (CICR, 2015). Se debe destacar que sostener esto no autoriza a los grupos insurgentes a cometer cualquier acto en contra de blancos militares, pues como se dijo anteriormente, no todo tipo de violencia está permitido.



A su vez, Ratner (2006) resalta que, desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, diferentes sectores de la arena internacional han hecho un llamado por reformar el Derecho Internacional Humanitario. Según el autor, existe un sector que afirma que las normas del conflicto son benignas para los actores terroristas, otros, afirman que es benigno para los gobiernos. Sin embargo, se sostiene que los postulados de esta rama del derecho internacional son suficientes para enfrentar el reto que significa el terrorismo. Los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales cubren la mayoría de los conflictos que se han dado bajo la “guerra al terror”, tanto Afganistán como Irak encajan dentro de las definiciones de conflictos de los mencionados instrumentos; ahora, para los casos donde algún conflicto no se enmarca en dichos tratados, los principios de humanidad, la consciencia pública, y la costumbre internacional deben entrar a suplir estos vacíos (Ratner, 2006). De esta forma, es posible extraer algunos principios de las normas que regulan el conflicto que deben ser aplicados a la totalidad de los conflictos, estén o no regidos por los Convenios de Ginebra. Este argumento se sostiene en contra de la retórica sobre la no aplicabilidad de estos convenios al tratarse de acciones policivas en contra del terrorismo internacional. En el mismo sentido, en ausencia de principios, se debe aplicar la costumbre internacional referente a las normas del conflicto, la cual ha sido construida por siglos. A su vez, existe el argumento que, debido al incumplimiento de los grupos terroristas del Derecho Internacional Humanitario, este no debe ser vinculante para las fuerzas estatales, ya que la aplicación de este las deja en desventaja. Esta no reciprocidad del Derecho Internacional Humanitario provoca en ciertos sectores que se hagan llamados a tomar represalias, ejemplo de esto es la respuesta armada a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Así, no es posible que un Estado atente contra civiles de otro Estado como respuesta a un ataque terrorista, existen objetivos militares que pueden ser blanco de represalias, como en el caso de los bombardeos a Libia en 1986; no obstante, sin importar la ley que debe aplicarse, los principios y costumbres

mencionados anteriormente dictan que no podrá haber bombardeos a posiciones civiles (Ratner, 2006). Así, el aumento del terrorismo sigue provocando en la academia argumentos sobre la necesidad de replantear el Derecho Internacional Humanitario y relación con el terrorismo.

Por su parte, Ferrano (2016) destaca que el aumento del terrorismo, además de hacer necesario un análisis en la forma en la que los grupos terroristas interactúan con el Derecho Internacional Humanitario, hace necesario analizar la respuesta de los Estados al terrorismo. Así, vale la pena destacar que, bajo el discurso de la “guerra al terror”, la línea entre el conflicto armado y terrorismo se han empezado a borrar. Es decir, los casos de respuesta armada a ataques terroristas dejaron de ser considerados como conflictos armados, para convertirse en acciones policivas, intervenciones de seguridad, entre otros. Estos casos, al no tratarse de un conflicto armado, no estarían regidos en principio por el Derecho Internacional Humanitario, algo que supone un reto en materia de Derechos Humanos. Así, se ha revivido la cuestión referente a las detenciones, el estatus legal, y el tratamiento que se debe dar a aquellos miembros de grupos terroristas. Es en este punto entonces donde vale la pena destacar lo mencionado con anterioridad sobre el estatus de los terroristas, es decir, la categoría de combatiente ilegal (CICR, 2020). Estos combatientes, los cuales pierden sus privilegios del Derecho Internacional Humanitario ya que no son civiles o combatientes, han sido objeto de distintos abusos, los cuales resultan del vacío normativo existente en el Derecho Internacional Humanitario.

En el mismo sentido, el discurso antiterrorista predominante ha optado por designar a la mayoría de los grupos insurgentes como terroristas, deslegitimizando su actuar y volviéndolos combatientes ilegales (Ferrano, 2016). Ahora bien, no se debe desconocer que, como se evidenció en puntos anteriores de este escrito, el terrorismo sí hace parte del actuar de la mayoría de los

grupos insurgentes. De esta forma, es posible para los Estados desconocer la calidad de combatiente de los actores insurgentes terroristas y, de manera consecuente, aplicar el estatus de combatiente ilegal, desconociendo algunos postulados del Derecho Internacional Humanitario. La ausencia de una definición clara y única de terrorismo ha permitido que situaciones como estas se presenten. A su vez, Ferrano (2016) afirma que algunos Estados tienen la falsa concepción de que la aplicación del Derecho Internacional Humanitario limita las políticas antiterroristas y que terminaría en la impunidad de aquellos que cometen actos de terrorismo. Si bien el autor afirma que esto es falso, no se puede desconocer que las amplias garantías de las normas del conflicto, al menos en casos de conflicto armado no internacional, sí limitan los esfuerzos de los Estados por combatir el principal riesgo de seguridad del mundo moderno, el terrorismo. No obstante, existe la necesidad de delinear la frontera entre los casos de terrorismo y los casos de conflicto armado no internacional.

En su intervención ante las Naciones Unidas, el representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Chirstopher Harland, expresó la preocupación de la organización internacional frente a las medidas antiterroristas que se han adoptado. Así, la mayor preocupación de la Cruz Roja es el desconocimiento de los Estados en cuanto a la aplicación del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario, y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto no quiere decir que se desconozca el derecho que tienen los Estados a defenderse o a llevar a cabo medidas en contra del terrorismo; sin embargo, dichas medidas no pueden violar las protecciones personales que gozan todos los individuos, inclusive los miembros de grupos terroristas (CICR, 2019). A su vez, uno de los principales retos que identifica el Comité Internacional de la Cruz Roja es el rol que juegan los niños en el conflicto, ya que, bajo todas las condiciones, estos, según la Cruz Roja, deben ser reconocidos como víctimas. Se debe destacar

en este punto que miles de menores de edad participan en diversos conflictos al rededor del mundo, muchos de estos reclutados de manera forzosa, o se han unido a grupos insurgentes de manera desesperada por sobrevivir (Human Rights Watch, 2008). Así, los menores que son detenidos deben tener una protección especial en atención a la resolución 74/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños. De acuerdo a un informe de Human Rights Watch (2019), en el marco de la lucha contra ISIL, las autoridades iraquí y del Gobierno Regional Kurdo (Irak) detuvieron a decenas de menores con nexos con ISIL, los cuales fueron sometidos a procesos penales iguales a los de adultos. En el mismo sentido, dichos menores fueron torturados y obligados a confesar la comisión de actos de terrorismo o a delatar otros partícipes de estos actos. Sobre esto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2019) destaca que los menores deben ser detenidos solo como último recurso, al no ser posible desconocer la manera en la que estos ingresaron al conflicto armado. En cuanto a la cuestión de los menores participando en conflictos armados, no se debe desconocer la violación al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por parte de los grupos terroristas al reclutar de manera forzosa a menores de edad. Grupos terroristas como las FARC en Colombia y el Ejército de Resistencia del Señor en Uganda, se han caracterizado por el reclutamiento de menores en el marco de conflictos no internacionales.

En la misma declaración ante las Naciones Unidas, la Cruz Roja destacó que la ayuda brindada por esta organización a todas las partes de los conflictos no puede ser considerada como apoyo o reconocimiento a grupos insurgentes, posición que han asumido algunos Estados. Así, las medidas antiterroristas, nacionales e internacionales, no pueden desconocer el respeto a la ayuda humanitaria, protegida por los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales; bajo esta lógica, las organizaciones que prestan ayuda humanitaria no pueden ser objeto de

ataques por parte de los Estados en su lucha contra el terrorismo (CICR, 2019); no obstante, en repetidas ocasiones, trabajadores humanitarios han sido objeto de ataques. A su vez, esta ayuda humanitaria se incluye en las leyes penales nacionales como ayuda al terrorismo, lo cual pone en riesgo la neutralidad y eficacia de misiones humanitarias. En este sentido, diferentes Estados se han abstenido de realizar operaciones de contraterrorismo en áreas designadas exclusivamente como de ayuda humanitaria.

A su vez, en el reporte que se referenció en párrafos anteriores, el Comité Internacional de la Cruz Roja (2015), aseguró que en términos legales no existe tal cosa como la “guerra al terror”. Ahora, la Cruz Roja analiza la legalidad de cada acción terrorista a nivel nacional e internacional de manera individual, es decir, no es posible afirmar que todas las medidas antiterroristas violan el Derecho Internacional Humanitario en casos de intervenciones armadas internacionales o esfuerzos a nivel nacional. A su vez, de acuerdo a la Cruz Roja (2015), es incorrecto afirmar que existe un conflicto de magnitudes globales en contra de grupos terroristas con alcance internacional, tales como Al Qaeda o ISIL. Así, las intervenciones militares podrán ser consideradas guerras interestatales o conflictos armados no internacionales dependiendo de sus participantes. En consecuencia, las personas de interés de la lucha contra el terrorismo que no se encuentren en la zona del conflicto, no deben ser blancos militares de ningún tipo. A su vez, es claro que algunos actos de violencia en el marco de un conflicto podrán quedar fuera de este por falta de un nexo que lo relacione con este.

## Conclusiones

Con el objetivo de darle cierre a los principales puntos que se han analizado a lo largo de este escrito, se recogerán las conclusiones más importantes de cada uno y su relación con el problema central. En este sentido, es importante resaltar ciertos asuntos relacionados a la forma en la que el conflicto armado ha evolucionado y las implicaciones que esto a tenido para la seguridad internacional. Bajo esta misma lógica, vale la pena retomar la relación que existe entre dichos conflictos y el terrorismo, el cual ha aumentado desde el año 2000 de manera considerable. En consecuencia, con el objetivo de continuar con el análisis del terrorismo, resulta relevante explorar los diferentes significados que se le ha dado a este, a nivel doctrinal y a nivel de regulaciones de diferentes bloques regionales. Sin embargo, el proceso de buscar una definición para el terrorismo tiene ciertos factores que no permiten que exista una única definición. De la misma manera, al ser el terrorismo uno de los protagonistas de los conflictos modernos resulta necesario concluir con las implicaciones que tiene la interacción de este con el Derecho Internacional Humanitario. Así, al finalizar el análisis de los puntos anteriores, se debe cuestionar si existe la necesidad de reformar las normas que regulan el conflicto armado con el objetivo de adaptarlo al fenómeno del terrorismo.

En ese sentido, los conflictos modernos han sufrido una serie de cambios que permiten que el papel central de estos lo tengan los grupos insurgentes. Desde que Grocio propuso la teoría de la guerra justa, el mundo ha visto como los conflictos cambian y se adaptan a las diferentes regulaciones y prohibiciones. Así, se puede constatar que desde que los Estados optaron por abandonar la guerra para resolver sus controversias, el número de conflictos armados interestatales ha decrecido a aproximadamente a cinco en la actualidad. Es así como se puede

afirmar, apoyando la teoría de William S. Lind (2004), que, en la actualidad, los conflictos armados están en manos de las insurgencias, siendo estos los principales actores. A su vez, estas insurgencias buscan recurrir a mecanismos no convencionales que buscan igualar la capacidad militar de los Estados. En esta nueva “guerra híbrida”, como la llamaron Mattis y Hoffman (2005), se ha propagado por distintos países, creando una red de conflictos armados y ataques terroristas relacionados, en ocasiones, a conflictos armados a nivel global. En este sentido, la primera conclusión de este texto es que el conflicto armado moderno se adaptó a las nuevas circunstancias y normativas internacionales que prohíben la guerra entre Estados, teniendo esto como resultado el protagonismo de grupos insurgentes en dichos conflictos. A su vez, de esto se desprende que, en las coyunturas internacionales modernas, existen Estados que emplean grupos irregulares, no estatales, para ejecutar actos de agresión, pero que, por la clandestinidad de estos grupos, no es posible vincularlos a la estructura de algún Estado. En el mismo sentido, el terrorismo ha generado un cambio en las razones por las cuales los Estados van a la guerra, desde el 2001, se interiorizó que interferir con investigaciones y operaciones antiterroristas podría constituir un acto de agresión por parte de los Estados, por lo cual diversas intervenciones, como la llevada a cabo por la Coalición en Afganistán en el 2001, han sido consideradas como legítima defensa. De esta forma los grupos insurgentes terroristas han tomado el monopolio de los conflictos armados, siendo partícipes de la mayoría de los enfrentamientos armados contemporáneos.

Ahora bien, teniendo en cuenta la importancia que adquirió el terrorismo en el marco de los conflictos armados, especialmente en los no internacionales, y de la seguridad internacional se volvió aún más relevante la búsqueda por su significado. Diversos autores (Saul, Williams, Golder, Dinstein, Di Filippo, Müllerson, Manning) y organizaciones internacionales (Unión

Europea, OEA, Unión Africana, ONU, OIC) han dotado al terrorismo de significado; sin embargo, no existe a nivel global una definición para este. De las definiciones estudiadas se tienen como factores comunes (a) los actos de violencia, (b) dichos actos cometidos en contra de la población civil o contra blancos aleatorios, y (c) un factor político o ideológico de los grupos terroristas, cuya (d) finalidad es doblegar a un Estado o una organización internacional. Estas cuatro características podrían permitir la creación de una definición de terrorismo, teniendo en cuenta que esta sería una amplia y ambigua. En este sentido, dentro del marco de las Naciones Unidas se han suscrito tratados y convenciones relacionados a actos particulares de terrorismo como el secuestro de aeronaves. Sin embargo, el principal problema para dotar de una definición internacional al terrorismo en general no son factores jurídicos, son factores políticos. Como se evidenció a lo largo del texto, los Estados usan el término terrorismo de manera unilateral, predominantemente para tachar a algún grupo extremista. No obstante, esos mismos grupos son protegidos y patrocinados por otros Estados; el caso más ilustrativo es el Hizbulá, considerado terrorista por diversos países, y como un actor político legítimo por Irán. Así, una segunda conclusión es la inexistencia de una definición de terrorismo, desde una óptica jurídico-normativa, y la dificultad de crearla, causada por razones políticas.

La inexistencia de una definición del terrorismo y de una cooperación internacional para encontrarla, conlleva y genera una serie de desafíos relacionados al conflicto armado moderno. Así, se puede concluir que uno de los principales retos que enfrenta el Derecho Internacional Humanitario es el vacío que tiene este en cuanto al terrorismo. Si bien bajo las normas del conflicto el terrorismo y varias prácticas empleadas por grupos terroristas están prohibidas, no existe una claridad sobre el estatus de los miembros de los grupos en cuestión. Este vacío, el cual es una consecuencia directa de la falta de definición, presenta dos cuestiones, una referente al



actuar de las fuerzas de los Estados, y otra referente al tratamiento que se debe dar a los grupos terroristas.

Así, al ser insurgentes, los terroristas podrían ser considerados como combatientes legítimos; sin embargo, al no acoplarse a las normas del Derecho Internacional Humanitario de manera permanente, estos deben perder su calidad de partes de un conflicto; a diferencia de aquellos que en el marco de un conflicto violan las normas de este y serán objeto de responsabilidad por crímenes de guerra. Al perder la calidad de combatiente, se estaría perdiendo también la calidad de prisionero de guerra y todo lo que esto incluye en términos de imputaciones penales. De esta forma los terroristas serían considerados delincuentes y tendrían las garantías comunes de otros criminales corrientes. Esto resulta conveniente entonces en el marco del terrorismo domestico o conflictos armados no internacionales exclusivamente sin participación internacional. En los casos de intervenciones extranjeras antiterroristas, donde no se está combatiendo directamente al Estado sino a grupos insurgentes, aparece el problema del tratamiento o estatus que tienen estos sujetos del conflicto, ya que no responden a ningún tipo de acuerdo o tratado de Derecho Internacional Humanitario.

En este sentido, los ejércitos de los Estados tienen la obligación de actuar bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario, ya que son los Estados, partes combatientes de un conflicto armado no internacional, quienes ratifican los tratados de esta rama del derecho internacional. Teniendo en cuenta que los terroristas no actúan bajo dichas normas, las fuerzas armadas podrían verse en desventaja al estar sometidas al régimen estricto del Derecho Internacional Humanitario, algo que dificulta las operaciones militares antiterroristas y pone en entredicho su efectividad. Bajo esta lógica, el vacío que existe para los terroristas, combinado con

la lógica de que los terroristas no son objeto del Derecho Internacional Humanitario, lleva a que se desconozcan una serie de garantías inherentes a las personas, dentro y fuera del conflicto. Un ejemplo de esto son las supuestas torturas llevadas a cabo en centros de detención estadounidenses dentro del marco de la “guerra al terror”; si bien estos centros han permitido tener información sobre posibles ataques terroristas, se han desconocido una serie de derechos protegidos a nivel internacional. Ahora, de esto se puede concluir que, si bien los grupos terroristas desconocen la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, los Estados no pueden hacer lo mismo en respuesta, esto daría mayor legitimidad al terrorismo y se estarían violando una serie de acuerdos internacionales, así como desconociendo una construcción normativa sobre el conflicto armado, la costumbre internacional, y la protección a los Derechos Humanos.

De esta forma, el vacío normativo que tiene el Derecho Internacional Humanitario no puede ser remediado con el desconocimiento de este. Por el contrario, se deben buscar alternativas para llenar dichos vacíos, alternativas que no pongan en entredicho el respeto por ciertos mínimos de derechos. Así, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos puede ser un instrumento que supla los vacíos, las interacciones entre estas dos ramas del derecho internacional pueden ser, de manera inmediata una solución a esta cuestión, solución que es aplicada en la actualidad por algunos Estados y tribunales internacionales. De igual manera, no es posible desconocer que los mencionados vacíos presentan un problema para el actuar de los Estados, por lo que se podría hacer revisión de los postulados del Derecho Internacional Humanitario, actualizándolo a las problemáticas del conflicto moderno. Por esto, se puede analizar en un futuro la posibilidad de crear una caracterización particular para los terroristas en los conflictos armados, en la misma forma que existe para los mercenarios o los espías. Es claro

que esta caracterización necesitaría una definición desde una perspectiva jurídico-normativa del terrorismo aceptada de manera general, algo para lo cual la política internacional actual no está preparada.

## Referencias

### Referencias generales

ABC News. (2016, septiembre 14). 9/15/01: Pres. Bush Declares War on Terror [Archivo de video].

Recuperado de <https://abcnews.go.com/Archives/video/sept-15-2001-president-declares-war-terror-10877347>

Acuña, B. (2017). Guerra híbrida. Febrero 3, 2020, de Wall Street International. Sitio web:

<https://wsimag.com/es/economia-y-politica/26975-guerra-hibrida>

Acuña, B. (2018). Conflictos modernos: Percepción versus realidad. Febrero 3, 2020, de Wall Street

International. Sitio web: <https://wsimag.com/es/economia-y-politica/39977-conflictos-modernos>

Alfitri, A. (2006). The Organization of Islamic Conference and Its Significance for War against Terrorism. *Asian Journal of International Law*, 1, 307-347.

Arnold, R. (2004). The Prosecution of Terrorism as a Crime Against Humanity. *Heidelberg Journal of International Law*, 64, 979-1000.

Bartels, R. (Octubre de 2016). Terrorist Groups As Parties To An Armed Conflict. En E. Mikos-Skuza (Presidencia). Terrorism, Counter-Terrorism and International Humanitarian Law. Simposio llevado a cabo en el XVII Bruges Colloquium. College of Europe. Brujas, Bélgica.

Cassese, A. (2001). Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law. *European Journal of International Law*, 12 (5), 993-1001.

Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Sitio web:

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/descargas.html>

CICR (2015). ICRC, International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts in 2015. Sitio web: <https://casebook.icrc.org/case-study/icrc-international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts-2015>

CICR. (2004). ¿Qué es el derecho internacional humanitario?. Marzo 12, 2020, de Comité Internacional de la Cruz Roja. Sitio web: [https://www.icrc.org/es/download/file/3648/dih.es\\_.pdf](https://www.icrc.org/es/download/file/3648/dih.es_.pdf)

CICR. (2010). Jus ad bellum y jus in bello. Febrero 3, 2020, de Comité Internacional de la Cruz Roja. Sitio web: <https://www.icrc.org/es/doc/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/jus-in-bello-jus-ad-bellum/overview-jus-ad-bellum-jus-in-bello.htm>

CICR. (2014). Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales. Marzo 12, 2020, de Comité Internacional de la Cruz Roja. Sitio web: <https://www.icrc.org/es/document/los-convenios-de-ginebra-de-1949-y-sus-protocolos-adicionales>

CICR. (2019). Counter-terrorism activities must respect protections afforded by international humanitarian law. Marzo 12, 2020, de Comité Internacional de la Cruz Roja. Sitio web:

<https://www.icrc.org/en/document/counter-terrorism-activities-must-respect-protections-afforded-international-humanitarian>

CICR. (2020). Combatants. Marzo 12, 2020, de Comité Internacional de la Cruz Roja. Sitio web:

<https://casebook.icrc.org/glossary/combatants>

CICR. (2020). Status. Marzo 12, 2020, de Comité Internacional de la Cruz Roja. Sitio web:

<https://casebook.icrc.org/glossary/status>

CICR. (2020). Terrorism and terrorists. Marzo 12, 2020, de Comité Internacional de la Cruz Roja. Sitio

web: <https://casebook.icrc.org/glossary/terrorism-and-terrorists>

CICR. (2020). Unprivileged belligerent. Marzo 12, 2020, de Comité Internacional de la Cruz Roja. Sitio

web: <https://casebook.icrc.org/glossary/unprivileged-belligerent>

Cifras y Conceptos (2010). Número De Secuestros Por Autor. Sitio Web:

[http://www.cifrasyconceptos.com/secuestro/secuestros\\_autor.php#](http://www.cifrasyconceptos.com/secuestro/secuestros_autor.php#)

Coalition for the ICC. (2019). Activación histórica del Crimen de Agresión. Febrero 3, 2020, de

Coalition for the ICC. Sitio web: <http://www.coalitionfortheicc.org/es/crimen-de-agresion>

Corte Penal Internacional. (2013). State Parties to the Rome Statute. Febrero 3, 2020, de Corte Penal

Internacional. Sitio web: <https://asp.icc->

[api.int/en\\_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx](http://api.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx)

Council on Foreign Relations. (2019). Conflict In Ukraine. Febrero 3, 2020, de Council on Foreign Relations. Sitio web: <https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>

Council on Foreign Relations. (2019). Global Conflict Tracker. Febrero 3, 2020, de Council on Foreign Relations. Sitio web: <https://www.cfr.org/interactive/global-conflict-tracker?category=usConflictStatus&vm=list>

DeVore, M. (2012). Exploring the Iran-Hezbollah Relationship: A Case Study of how State Sponsorship affects Terrorist Group Decision-Making. *Perspectives on Terrorism*, 6 (4-5), 85 - 107.

Di Filippo, M. (2014). The definition(s) of terrorism in international law. En Saul, B (Ed), *Research Handbook on International Law and Terrorism* (pp. 3-19). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Dinstein, Y. (2014). *Non-International Armed Conflicts in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Dumitriu, E. (2004). The E.U.'s Definition of Terrorism: The Council Framework Decision on Combating Terrorism. *German Law Journal*, 5, 585-602.

Felter, C; Masters, J & Sergie, M. (2020). Al Shabab. Febrero 3, 2020, de Council on Foreign Relations.

Sitio web: <https://www.cfr.org/background/al-shabab>

Ferrano, T. (Octubre de 2016). Interaction And Overlap Between Counter-Terrorism Legislation And International Humanitarian Law. En P. Berman (Presidencia). Terrorism, Counter-Terrorism and International Humanitarian Law. Simposio llevado a cabo en el XVII Bruges Colloquium. College of Europe. Brujas, Bélgica.

Fuentes, X. (2014). La prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza por el derecho internacional.

*Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, 32, 255-267.

Galingging, R. (2010). Prosecuting Acts of Terrorism as Crimes Against Humanity Under the ICC Treaty. *Indonesian Journal of International Law*, 7, 746-774.

Gallego, G. (2004). Sobre el monopolio legítimo de la violencia. *Revista de Derecho Penal*, 14, 127-152.

Gasser, H. (2002). Acts of terror, terrorism and international humanitarian law. *International Review of Red Cross*, 84, 547-570.

Global Institute for the Prevention of Aggression. (2019). Definition of the crime of aggression. Marzo 12, 2020, de Global Institute for the Prevention of Aggression. Sitio web:

<https://crimeofaggression.info/role-of-the-icc/definition-of-the-crime-of-aggression/>



- Golder, B & Williams, G. (2004). What is terrorism problems of legal definition. *University of New South Wales Law Journal*, 27, 255-270.
- Greenwood, C. (1989). Terrorism and Humanitarian Law The Debate over Additional Protocol I. *Israel Yearbook on Human Rights*, 19, 187-208.
- Harding, L. (2020). Soleimani's Death Sparks Renewed Calls for Canada to Designate Iran's Revolutionary Guard a Terrorist Entity. Febrero 3, 2020, de The Epoch Times. Sitio web: [https://www.theepochtimes.com/soleimanis-death-sparks-renewed-calls-for-canada-to-designate-irans-revolutionary-guard-a-terrorist-entity\\_3197062.html](https://www.theepochtimes.com/soleimanis-death-sparks-renewed-calls-for-canada-to-designate-irans-revolutionary-guard-a-terrorist-entity_3197062.html)
- Hathaway, D & Shapiro, S. (2017). *The Internationalists: How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World*. Nueva York: Simon & Schuster.
- History Editors. (2010). Nerve gas attack on Tokyo subway. Marzo 12, 2020, de A&E Television Networks. Sitio web: <https://www.history.com/this-day-in-history/nerve-gas-attack-on-tokyo-subway>
- Hoffman, B. (2009). The first non-state use of a chemical weapon in warfare: the Tamil Tigers' assault on East Kiran. *Small Wars & Insurgencies*, 20, 463-477.
- Hoffman, F & Mattis, J. (2005). Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars. *Proceeding Magazine - USNI*, 132, 1-2.

Hoffman, M. (2002). Terrorists Are Unlawful Belligerents, Not Unlawful Combatants: A Distinction with Implications for the Future of International Humanitarian Law. *Case Western Reserve Journal of International Law*, 34, 227-230.

Human Rights Watch (2008). Child Soldiers Global Report 2008. Sitio Web:

[https://www.hrw.org/legacy/pub/2008/children/Child\\_Soldiers\\_Global\\_Report\\_Summary.pdf](https://www.hrw.org/legacy/pub/2008/children/Child_Soldiers_Global_Report_Summary.pdf)

Human Rights Watch (2019). Everyone Must Confess. Sitio Web:

<https://www.hrw.org/report/2019/03/06/everyone-must-confess/abuses-against-children-suspected-isis-affiliation-iraq>

Human Security Research Group. (2014). Human Security Report 2013. Febrero 3, 2020, de Simon Fraser University. Sitio web:

[https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HSRP\\_Report\\_2013\\_140226\\_Web.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HSRP_Report_2013_140226_Web.pdf)

Institute for Economics and Peace . (2019). Global Terrorism Index. Febrero 3, 2020, de Institute for Economics and Peace. Sitio web: <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf>

International Crisis Group. (2020). CrisisWatch: Tracking Global Conflicts. Febrero 3, 2020, de International Crisis Group. Sitio web: <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch>

Koss, M. (2018). Flexible Resistance: How Hezbollah and Hamas are mending ties. Febrero 3, 2020, de Carnegie Middle East Center. Sitio web: <https://carnegie-mec.org/2018/07/11/flexible-resistance-how-hezbollah-and-hamas-are-mending-ties-pub-76782>

Krähenmann, S. (Octubre de 2016). Legal Framework: Addressing Terrorism And Counter-Terrorism. En P. Berman (Presidencia). Terrorism, Counter-Terrorism and International Humanitarian Law. Simposio llevado a cabo en el XVII Bruges Colloquium. College of Europe. Brujas, Bélgica.

Lietzau, W. (2004). Old Laws, New Wars: Jus ad Bellum in an Age of Terrorism. *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 8, 383 - 455.

Lind, W. (2004). Understanding Fourth Generation War. Marzo 12, 2020, de U.S. Army Combined Arms Center. Sitio web: <https://www.hsdl.org/?view&did=482203>

Manning, M. J. (2015). Establishing comprehensive definition of terrorism. *Public Lawyer*, 23, 9-13.

Muhammadin, M. (2015). Terrorism and the Crime of Aggression Under the Rome Statute. *Jurnal Mimbar Hukum*, 27, 1 - 17.

Müllerson, R. (2015). Jus ad Bellum and International Terrorism. *International Law Studies*, 79, 75 – 127.

Murphy, C. (2014). The legal response to terrorism of the European Union and Council of Europe. En Saul, B (Ed), *Research Handbook on International Law and Terrorism* (pp. 685-700). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Oyez (n.d.). Hamdan v. Rumsfeld. Marzo 12, 2020. Sitio Web: <https://www.oyez.org/cases/2005/05-184>

Powell, A. (2012). Pinker explains ‘The Long Peace’. Febrero 3, 2020, de The Harvard Gazette Sitio web: <https://news.harvard.edu/gazette/story/2012/03/pinker-explains-the-long-peace/>

Price, A. (2018). Are we in the middle of a long peace—or on the brink of a major war?. Febrero 3, 2020, de AAAS. Sitio web: <https://www.sciencemag.org/news/2018/02/are-we-middle-long-peace-or-brink-major-war>

Proulx, J. (2003). Rethinking the Jurisdiction of the International Criminal Court in the Post-September 11th Era: Should Acts of Terrorism Qualify As Crimes Against Humanity? . *American University International Law Review*, 19, 1010 - 1089.

Public Safety Canada. (2019). Currently listed entities. Febrero 3, 2020, de Public Safety Canada. Sitio web: <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx>

Ratner, S. R. (2006). The war on terrorism and international humanitarian law. *Michigan State Journal of International Law*, 14, 19-26.

- Ritchie, H; Hasell, J; Appel, C & Roser, M. (2019). How many people are killed by terrorists worldwide?. Febrero 3, 2020, de Our World In Data. Sitio web: <https://ourworldindata.org/terrorism#how-many-people-are-killed-by-terrorists-worldwide>
- Rollings, J. (2019). Foreign Terrorist Organizations. Febrero 3, 2020, de Congressional Research Service. Sitio web: <https://fas.org/sgp/crs/terror/IF10613.pdf>
- Royde-Smith, J & Showalter, D. (2020). World War I. Febrero 3, 2020, de Encyclopædia Britannica, inc. Sitio web: <https://www.britannica.com/event/World-War-I/The-end-of-the-German-war>
- Salmón, E. (2011). El crimen de agresión después de Kampala: soberanía de los Estados y lucha contra la impunidad. Febrero 3, 2020, de Pontificia Universidad Católica del Perú. Sitio web: [http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/el\\_crimen\\_de\\_agresion\\_despues\\_de\\_kampala.pdf](http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/publicaciones/el_crimen_de_agresion_despues_de_kampala.pdf)
- Samuel, K. (2014). The legal response of the Organisation of Islamic Cooperation. En Saul, B (Ed), *Research Handbook on International Law and Terrorism* (pp. 717-733). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Saul, B. (2006). *Defining Terrorism in International Law*. Nueva York: Oxford University Press.
- Saul, B. (2014). Terrorism and international humanitarian law. En Saul, B (Ed), *Research Handbook on International Law and Terrorism* (pp. 208-231). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

Saul, B. (2019). 15 - The Crime of Terrorism within the Jurisdiction of the African Court of Justice and Human and Peoples' Rights. En C. Jalloh, K. Clarke & V. Nmehielle (Eds.), *The African Court of Justice and Human and Peoples' Rights in Context* (pp. 409 - 448). Cambridge: Cambridge University Press.

Sossai, M. (2014). The legal response of the Organisation of American States in combatting terrorism. En Saul, B (Ed), *Research Handbook on International Law and Terrorism* (pp. 701-716). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.

The Global Campaign for Ratification and Implementation of Kampala Amendments on the Crime of Aggression. (2019). Definition of the crime of aggression. Febrero 3, 2020, de The Global Campaign for Ratification and Implementation of Kampala Amendments on the Crime of Aggression. Sitio web: <https://crimeofaggression.info/role-of-the-icc/definition-of-the-crime-of-aggression/>

The New Humanitarian. (2017). UPDATED: Mapped - a world at war. Febrero 3, 2020, de The New Humanitarian. Sitio web: <https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2017/04/04/updated-mapped-world-war>

UNODC. (2018). Criminal Justice Responses to Terrorism. Febrero 3, 2020, de UNODC. Sitio web: <https://www.unodc.org/e4j/en/terrorism/module-4/key-issues/core-international-crimes.html#/top>

Vision of Humanity. (2018). Far-right attacks in the West surge by 320 per cent. Febrero 3, 2020, de

Vision of Humanity. Sitio web: <http://visionofhumanity.org/global-terrorism-index/far-right-attacks-in-the-west-surge-by-320-per-cent/>

Von Schorlemer, S. (2003). Human Rights: Substantive and Institutional Implications of the War Against Terrorism. *European Journal of International Law*, 14, 265 – 282.

Witte, G. (2019). Afghanistan War. febrero 3, 2020, de Encyclopædia Britannica, inc. Sitio web:

<https://www.britannica.com/event/Afghanistan-War>

### **Instrumentos normativos internacionales**

Carta de la ONU, artículo 2, numeral 4.

Carta de la ONU, artículo 39.

Carta de la ONU, capítulo 4.

Convención de la Organización de la Conferencia Islámica sobre la Lucha Contra el Terrorismo

Internacional. Ouagadougou, abierta a ratificación el 1 de julio de 1999. Disponible en:

[http://ww1.oic-oci.org/english/convention/terrorism\\_convention.htm](http://ww1.oic-oci.org/english/convention/terrorism_convention.htm)

Convención de la OUA sobre la Prevención y el Combate del Terrorismo. Adis Adeba, abierta a ratificación el 1 de julio de 1999. Serie de Tratados de las Naciones Unidas Vol. 179, No. 2219, disponible en: <https://au.int/en/treaties/oau-convention-prevention-and-combating-terrorism>

Convención Interamericana Contra el Terrorismo. Washington D.C., abierta a ratificación el 6 de marzo de 2002. Serie sobre Tratado OEA A-66, disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-66.html>

Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos Contra las Personas y la Extorsión Conexa Cuando Estos Tengan Trascendencia Internacional. Washington D.C., abierta a ratificación el 2 de febrero de 1971. Serie sobre Tratados de la OEA, A-37, disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-49.html>

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma. 17 de julio de 1998. Serie Sobre Tratados de las Naciones Unidas Vol. 2187, No. 38544, disponible en: [https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome\\_statute\(s\).pdf](https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf)

Ley Modelo Africana de Contraterrorismo de la Asamblea de la Unión Africana. Malabo, 1 de julio de 2011. Disponible en: <https://www.peaceau.org/uploads/african-model-law-on-counter-terrorism-final-version-as-endorsed-by-the-17th-session-english.pdf>

Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU “Condena de los ataques del 11 de septiembre contra los Estados Unidos” S/RES/1368 (12 de septiembre de 2001), disponible en:



<https://www.un.org/sc/ctc/news/document/sres1368-2001-condemnation-of-11-september-attacks-against-united-states/>

Resolución 6 de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma “Entendimiento sobre las enmiendas al Estatuto de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión” RC/Res.6 (11 de junio de 2010), disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8015.pdf>

Resolución 74/133 de la Asamblea General de la ONU “Derechos de los Niños” A/RES/74/133 /18 de diciembre de 2019), disponible en: [https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2020-01/A\\_RES\\_74\\_133\\_E.pdf](https://bettercarenetwork.org/sites/default/files/2020-01/A_RES_74_133_E.pdf)

Tratado de Renuncia a la Guerra – Pacto Kellog Briand. París, 27 de agosto de 1928. Disponible en (inglés): [https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/kbpact.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbpact.asp)